# COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite Documentario
13 MAR. 2025
RECIBIDO
Firma: _____ Hora: 10:25 h.

## PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2024 - 2025

## DICTÁMEN

**Señor Presidente**

Han ingresado para dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, las siguientes iniciativas legislativas:

a. **Proyecto de Ley 29/2021-CR** presentado por el Grupo Parlamentario Somos Perú – Partido Morado, a iniciativa de los congresistas Alfredo Azurín Loayza, Hitler Saavedra Casternoque, Susel Ana María Paredes Piqué, Héctor Valer Pinto, José Enrique Jerí Ore y Yorel Kira Alcarraz Agüero; que proponen la Ley que modifica el artículo 7 de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

b. **Proyecto de Ley 54/2021-CR** presentado por el Grupo Parlamentario Somos Perú – Partido Morado, a iniciativa de los congresistas José Enrique Jerí Oré, Isabel Cortez Aguirre, Flor Aidee Pablo Medina, Wilmar Alberto Elera García, Héctor Valer Pinto, Hitler Saavedra Casternoque y Yorel Kira Alcarraz Agüero que, que proponen la Ley que modifica el artículo 7 de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

c. **Proyecto de Ley 1000/2021-CR** presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa de los congresistas Víctor Raúl Cutipa Ccama, Flavio Cruz Mamani, Jorge Samuel Coayla Juárez, Elías Marcial Varas Meléndez, Pasión Neomías Dávila Atanacio, Segundo Toribio Montalvo Cubas y Waldemar José Cerrón Rojas, que propone la Ley de Difusión del Mapa del Delito a Nivel Nacional.

d. **Proyecto de Ley 1059/2021-CR** actualizado por el Consejo Directivo en su sesión del 13 de diciembre de 2021, (Proyecto de Ley N° 6506/2020-CR); que propone la Ley que modifica la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para fortalecer la participación de la sociedad civil.

e. **Proyecto de Ley 1464/2021-CR** presentado por el Grupo Parlamentario de Perú Libre, a iniciativa de la congresista Silvana Emperatriz Robles Araujo y los congresistas; Alfredo Pariona Sinche, Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Alex Randu Flores Ramírez, Jorge Samuel Coayla Juárez y Flavio Cruz Mamani, que propone la Ley que incluye el Enfoque de Interculturalidad en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana e incorpora a representantes de las Rondas Campesinas y Nativas en el Consejo Nacional y en los Comités Regional, Provincial y Distrital de Seguridad Ciudadana.

f. **Proyecto de Ley 1598/2021-CR** presentado por el Grupo Parlamentario de Alianza para el Progreso, a iniciativa de la congresista Freddy Ronald Díaz Monago y los congresistas Roberto Enrique Chiabra León, Elva Edith Julón Irigoín, Cheryl Trigozo



Firmado digitalmente por: MONTOYA MANRIQUE Jorge Carlos FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/03/2025 15:19:36-0500

Reátegui, Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez, Eduardo Salhuana Cavides; y, María Grimaneza Acuña Peralta, que propone la Ley que incorpora la representación de las Comunidades Nativas al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y Promueve la Creación de la Seguridad Indígena.

g. **Proyecto de Ley 2041/2021-CR** presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa del congresista Bernardo Jaime Quito Sarmiento y los congresistas Wilson Rusbel Quispe Mamani, Kelly Roxana Portalatino Avalos, Flores Ramírez Alex Randu, Guido Bellido Ugarte y María Elizabeth Taipe Coronado, que propone la Ley que modifica la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para promover la Descentralización y la Participación Ciudadana.

h. **Proyecto de Ley 2488/2021-CR** presentado por el Grupo Parlamentario Perú Bicentenario, a iniciativa del congresista Marticorena Mendoza, Jorge Alfonso; Balcázar Zelada, José María; Varas Meléndez, Elías Marcial; Coayla Juárez, Jorge Samuel y Cutipa Ccama, Víctor Raúl, que propone la Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la emergencia del parque automotor policial empleado para la realización de patrullaje motorizado a nivel nacional y la infraestructura de las comisarías de la Policía Nacional del Perú.

i. **Proyecto de Ley 3349/2022-CR** presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa del congresista Wilson Rusbel Quispe Mamani y los congresistas Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Margot Palacios Huamán, María Elizabeth Taipe Coronado, Guido Bellido Ugarte y Américo Gonza Castillo, que propone la Ley que declara en emergencia el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

j. **Proyecto de Ley 3552/2022-CR** presentado por el Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional, a iniciativa del congresista Nivardo Edgar Tello Montes y los congresistas Paul Silvio Gutiérrez Ticona, Francis Jhasmina Paredes Castro, Elizabeth Sara Medina Hermosilla Lucinda Vásquez Vela y Segundo Teodomiro Quiroz Barboza, que propone la Ley que modifica el artículo 7 de la Ley 27933 incorporando al Coordinador Nacional de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana al CONASEC.

k. **Proyecto de Ley 4751/2022-CR** presentado por el Grupo Parlamentario Avanza País, a iniciativa del congresista Diego Alonso Fernando Bazán Calderón, Yessica Rosselli Amuruz Dulanto, Adriana Josefina Tudela Gutiérrez, Patricia Rosa Chirinos Venegas, Alejandro Enrique Cavero Alva y Norma Martina Yarrow Lumbreras, que propone la Ley que modifica el artículo 7 de ia ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para incorporar a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República como integrante del CONASEC.

l. **Proyecto de Ley 6420/2023-CR** presentado por el Grupo Parlamentario Accion Popular, a iniciativa de los congresistas Luis Ángel Aragón Carreño, Jhaec Darwin Espinoza Vargas, Jorge Luis Flores Ancachi, Elvis Hernán Vergara Mendoza, Hilda Marleny Portero López, y Raúl Felipe Doroteo Carbajo, que propone la Ley que modifica la ley 27933, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con la

finalidad de mejorar las acciones del estado en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

m. **Proyecto de Ley 8227/2023-CR** presentado por el Grupo Parlamentario Somos Perú, a iniciativa de los congresistas Alfredo Azurín Loayza, Héctor Valer Pinto, José Enrique Jerí Oré, José Bernardo Pazo Nunura y Hitler Saavedra Casternoque, que propone la Ley que modifica el artículo 5, modifica el literal g) e incorpora el literal j) al artículo 9 de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana con la finalidad de que el CONASEC informe de manera obligatoria al Congreso de la República sobre el cumplimiento del plan nacional de seguridad ciudadana.

n. **Proyecto de Ley 8418/2023-CR** presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de los congresistas Cruz María Zeta Chunga, Magally Santisteban Suclupe, Raúl Huamán Coronado, Eduardo Enrique Castillo Rivas, Mey Eliana Infantes Castañeda, Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco, Héctor José Ventura Ángel y Arturo Alegría García, que propone la Ley que propone se realice sesiones virtuales del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).

o. **Proyecto de Ley 10188/2024-CR** presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, a iniciativa de los congresistas Eduardo Salhuana Cavides, Roberto Enrique Chiabra León, Rosio Rorres Salinas, Lady Mercedes Camones Soriano, María Grimaneza Acuña Peralta, Idelso Manuel García Correa, Nelcy Lidia Heidinger Ballesteros y Elva Edith Julón Irigoín que propone la Ley que modifica la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para fortalecer la operatividad del CONASEC.

p. **Proyecto de Ley 10284/2024-CR** presentado por el Grupo Parlamentario Bloque Democrático Popular, a iniciativa de los congresistas Edgar Cornelio Reymundo Mercado, Isabel Cortez Aguirre y Sigrid Tesoro Bazán Narro que propone la Ley que modifica el Decreto Legislativo 1618 que actualiza la Ley 27933, con la finalidad de fortalecer la CONASEC y coadyuvar a la lucha contra la inseguridad ciudadana.

En la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas celebrada el 10 de marzo de 2025; luego del análisis y debate correspondiente, se aprobó el dictamen por **MAYORÍA** de los congresistas presentes, con los votos a favor de los congresistas Tudela Gutiérrez, Adriana Josefina; Azurín Loayza, Alfredo; Bazán Calderón, Diego Alonso; Chirinos Venegas, Patricia Rosa; Martínez Talavera, Pedro Edwin; Ramírez García, Tania Estefany; Rospigliosi Capurro, Fernando Miguel; Sánchez Palomino, Roberto Helbert; Valer Pinto, Héctor y Ventura Ángel, Héctor José, con los votos en contra de los congresistas Montoya Manrique, Jorge Carlos; Bustamante Donayre, Carlos Ernesto; Cueto Aservi, José Ernesto y Lizarzaburu Lizarzaburu, Juan Carlos y las abstenciones de los congresistas Chiabra León, Roberto Enrique y Williams Zapata, José Daniel.

## I. SITUACIÓN PROCESAL

### 1.1. Antecedentes procedimentales

a. **Proyecto de Ley 29/2021-CR**, fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 16 de agosto de 2021, e ingresó el 20 de agosto de 2021 a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, como única comisión dictaminadora.

b. **Proyecto de Ley 54/2021-CR**, fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 25 de agosto de 2021, e ingresó el 27 de agosto del 2021 a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, como única comisión dictaminadora.

c. **Proyecto de Ley 1000/2021-CR**, fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 15 de diciembre de 2021, e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, el 16 de diciembre de 2021, como única comisión dictaminadora.

d. **Proyecto de Ley 1059/2021-CR**, presentado en el Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 22 de diciembre de 2021, e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, el 06 de enero de 2022, como única comisión dictaminadora.

e. **Proyecto de Ley 1464/2021-CR**, presentado en el Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 14 de marzo de 2022, ingresó a la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, el 16 de marzo de 2022, como primera comisión dictaminadora y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, como segunda comisión dictaminadora.

f. **Proyecto de Ley 1598/2021-CR**, presentado en el Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 01 de abril de 2022, ingresó a la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, el 06 de abril de 2022 como primera comisión dictaminadora y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, como segunda comisión dictaminadora.

g. **Proyecto de Ley 2041/2021-CR**, presentado en el Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 16 de mayo de 2022, ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas el 23 de mayo de 2022 como única comisión dictaminadora.

h. **Proyecto de Ley 2488/2021-CR**, presentado en el Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 01 de julio del 2022, ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas el 06 de julio de 2022 como única comisión dictaminadora.

i. **Proyecto de Ley 3349/2022-CR**, presentado en el Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 19 de octubre de 2022, ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas el 21 de octubre de 2022 como primera comisión dictaminadora y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, como segunda Comisión dictaminadora.

j. **Proyecto de Ley 3552/2022-CR**, presentado en el Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 15 de noviembre de 2022, ingresó a la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas el 16 de noviembre de 2022 como única comisión dictaminadora.

k. **Proyecto de Ley 4751/2022-CR**, presentado en el Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 18 de abril de 2023, ingresó a la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas el 19 de abril de 2023 como única comisión dictaminadora.

l. **Proyecto de Ley 6420/2023-CR**, presentado en el Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 14 de noviembre de 2022, ingresó a la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas el 16 de noviembre de 2023 como única comisión dictaminadora

m. **Proyecto de Ley 8227/2023-CR,** presentado en el Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 17 de junio de 2024, ingresó a la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas el 19 de junio de 2024 como única comisión dictaminadora.

n. **Proyecto de Ley 8418/2023-CR**, presentado en el Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 18 de julio de 2024, ingresó a la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas el 18 de julio de 2024 como única comisión dictaminadora.

o. **Proyecto de Ley 10188/2024-CR**, presentado en el Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 12 de febrero de 2025, ingresó a la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas el 13 de febrero de 2025 como única comisión dictaminadora.

p. **Proyecto de Ley 10284/2024-CR**, presentado en el Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 20 de febrero de 2025, ingresó a la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas el 21 de febrero de 2025 como única comisión dictaminadora.

La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, en su Quinta Sesión Extraordinaria del periodo anual de sesiones 2022-2023, realizada el 14 de diciembre de 2022, aprobó por unanimidad de los parlamentarios presentes, el dictamen recaído en los

proyectos de ley 29/2021-CR, 54/2021-CR, 330/2021-CR, 1000/2021-CR, 1059/2021-CR, 1464/2021-CR, 1528/2021-CR, 1598/2021-CR, 2041/2021-CR, 3349/2022-CR y 3552/2022-CR.

No obstante, considerando el tiempo transcurrido desde la aprobación del mencionado dictamen, que este no se encontraba en la orden del día y que a este grupo de trabajo ingresaron nuevas iniciativas legislativas sobre la misma materia, la Comisión conformada por congresistas del periodo anual de sesiones 2024-2025, en su Primera Sesión Ordinaria realizada el 2 de setiembre de 2024 aprobó solicitar al Consejo Directivo el retorno a Comisión del mencionado dictamen.

En ese sentido, el Consejo Directivo, en sesión del 29 de octubre de 2024 aprobó el pedido de la comisión.

## 1.2. Antecedentes parlamentarios

### a. Periodo Parlamentario 2006 -2011

En el periodo parlamentario 2006-2011 se presentó el Proyecto de Ley N° 3638/2009-CR del Grupo Parlamentario Nacionalista, de autoría de la congresista Marisol Espinoza Cruz, con fecha 10 de noviembre de 2009; decretado a la Comisión Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra la Drogas.

La iniciativa propone reconocer y proteger a las Rondas Urbanas o Rondas Vecinales, creadas por iniciativa de la población urbana, como organizaciones integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Para este efecto, la iniciativa plantea 16 artículos, que comprenden al objeto de la norma, su definición y conformación; las finalidades y competencias; la coordinación con los gobiernos locales y otras instituciones; así como, la modificación del artículo 15 de la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y finalmente incorpora la relación de miembros del Comité Distrital.

### b. Periodo Parlamentario 2011 -2016

En el periodo parlamentario 2011-2016 se presentó el Proyecto de Ley N° 4856/2015-CR del Grupo Parlamentario Acción Popular - Frente Amplio, de autoría del congresista Yonhy Lescano Ancieta, con fecha 02 de octubre de 2015; decretado a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra la Drogas.

La iniciativa propone modificar los artículos 15 y 16 de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, declarando de interés la formación de Rondas Urbanas para la seguridad ciudadana en el ámbito provincial y distrital; asimismo, propone incorporar el artículo 16-A, para que sus representantes sean parte de los comités provinciales y distritales de seguridad ciudadana.

Esta iniciativa fue incorporada en el dictamen aprobado por mayoría en la vigésima sesión ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra la Drogas del 15 de junio de 2016, no obstante, no llegó a ser visto en el pleno del Congreso de la República.

**c. Periodo Parlamentario 2016 -2021**

Se presentaron dos Proyectos de Ley, el N° 5320/2020-CR, por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, a iniciativa del congresista Walter Benavides Gavidia. Ingresó al Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 21 de mayo de 2020 y fue derivado el 01 de junio de 2020 para su estudio y dictamen a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas en calidad de única comisión dictaminadora. Este proyecto propone la modificación de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, a fin de incluir a las rondas campesinas en el CONASEC.

El Proyecto de Ley N° 6506/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Podemos Perú (PP), a iniciativa del congresista Daniel Urresti Elera, ingresó al Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 21 de octubre de 2020 y fue derivado el 22 de octubre de 2020 a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, para su estudio y dictamen, como única comisión dictaminadora. Este proyecto propone la modificación de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para fortalecer la participación de la sociedad civil.

El dictamen recaído en ambas iniciativas fue aprobado con el voto unánime de los presentes, en la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión, celebrada el 13 de noviembre de 2020.

## 1.3. Control del cumplimiento de los requisitos constitucionales y reglamentarios

La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, en su calidad de comisión ordinaria encargada de estudiar y de dictaminar las iniciativas legislativas que buscan perfeccionar el marco legal que contribuya con el fortalecimiento del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento del Congreso.

En ese sentido, al haberse recibido en este órgano parlamentario dieciséis iniciativas legislativas que versan sobre la misma materia o materias conexas, se ha procedido a su acumulación a fin de elaborar un solo dictamen sobre las mismas, considerando que todas están referidas a la seguridad ciudadana.

Así, luego de la revisión de las iniciativas legislativas mencionadas, se puede determinar que, estas cumplen con los requisitos generales y especiales de las

proposiciones de ley, establecidos en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República; por lo que se dispuso se prosiga con el trámite de estudio, pedido de opinión y dictamen correspondiente.

## II. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS

### a. Proyecto de Ley 29/2021-CR

El proyecto de ley propone incorporar a la Marina de Guerra del Perú como miembro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, dentro del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC). Se fundamenta en la función de la Marina en la vigilancia y control del dominio marítimo, fluvial y lacustre, así como en su participación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La iniciativa busca formalizar su intervención en el SINASEC, dado que ya colabora con comités distritales y regionales de seguridad ciudadana. Se argumenta que su inclusión fortalecerá la seguridad nacional sin generar costos adicionales al Estado.

### b. Proyecto de Ley 54/2021-CR

El proyecto de ley propone modificar la Ley 27933 para incluir un representante de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). Según la exposición de motivos, la iniciativa busca fortalecer la participación ciudadana en la formulación e implementación de políticas de seguridad, reconociendo la laboral preventiva y de vigilancia comunitaria de las juntas vecinales.

### c. Proyecto de Ley 1000/2021-CR

El proyecto de ley plantea la necesidad de difundir públicamente un mapa del delito georreferenciado para mejorar la seguridad ciudadana en el Perú. Argumenta que el incremento de la delincuencia post-pandemia ha generado una mayor percepción de inseguridad y que el marco normativo actual no contempla la difusión masiva de información sobre zonas peligrosas. Se propone modificar el Decreto Legislativo 1316 para que tanto la Policía Nacional del Perú (PNP) como las municipalidades informen a la ciudadanía sobre los puntos de alta incidencia delictiva.

### d. Proyecto de Ley 1059/2021-CR

La proposición normativa plantea que las rondas campesinas y las juntas vecinales tengan representación formal en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para fortalecer la política de seguridad ciudadana con mayor participación social. La exposición de motivos señala que la participación ciudadana en el Perú es un derecho fundamental en el ámbito político, económico, social y cultural, sustentado en la Constitución y diversas leyes. Se destaca la existencia de mecanismos de incidencia en decisiones públicas, como el Foro del

Acuerdo Nacional y los Consejos de Coordinación Regional y Local. Se resalta la importancia de las rondas campesinas y juntas vecinales en la prevención del delito, reconociendo su legitimidad y colaboración con el Estado.

**e. Proyecto de Ley 1464/2021-CR**

El proyecto de ley propone la inclusión del enfoque intercultural en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, reconociendo la autonomía y función jurisdiccional de las comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas conforme al artículo 149 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. Resalta su rol en la administración de justicia mediante el derecho consuetudinario, su legitimidad social y su eficacia en la seguridad territorial. La propuesta busca articular su participación con las instituciones estatales para garantizar una seguridad ciudadana más efectiva.

**f. Proyecto de Ley 1598/2021-CR**

La propuesta legislativa busca fortalecer la seguridad de los pueblos indígenas, incorporándolos al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Sostiene que la ausencia del Estado en amplias zonas del país ha generado un "apartheid estatal", dejando a estas comunidades sin acceso a derechos fundamentales. La exposición de motivos resalta que un tercio del territorio peruano carece de presencia estatal, lo que propicia la violencia, el narcotráfico y otras actividades ilegales. Además, advierte sobre la expansión de carreteras sin planificación adecuada, afectando territorios indígenas y comprometiendo la seguridad ambiental. Se plantea la urgencia de implementar mecanismos de protección indígena ante estas amenazas.

**g. Proyecto de Ley 2041/2021-CR**

El proyecto de ley busca modificar los artículos 5 y 7 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, para descentralizar las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y fortalecer la participación de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y las Rondas Campesinas. La iniciativa justifica su propuesta en la necesidad de incluir a estas organizaciones, que ya desempeñan un papel clave en la seguridad ciudadana y la resolución de conflictos, en el máximo órgano del sistema. Además, plantea que las sesiones ordinarias del CONASEC se realicen en diversas regiones del país, promoviendo un enfoque descentralizado.

**h. Proyecto de Ley 2488/2021-CR**

La iniciativa legislativa propone declarar de interés nacional la emergencia del parque automotor y la infraestructura de las comisarías para fortalecer la respuesta ante la delincuencia y reforzar la seguridad ciudadana. La exposición de motivos analiza la situación de la seguridad ciudadana en el Perú y la capacidad operativa de la Policía Nacional. Se identifican deficiencias en infraestructura, equipamiento y recursos humanos que limitan su eficacia en la

prevención y combate del delito. Se menciona la falta de vehículos policiales y la lentitud en la ejecución del gasto público.

**i. Proyecto de Ley 3349/2022-CR**

La proposición normativa plantea declarar en emergencia el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y regular, por necesidad pública su proceso de reforma, a fin de revertir la aguda crisis que atraviesa el sector y prevenir y/o reprimir la criminalidad y delincuencia común. La exposición de motivos precisa que, los índices de delitos han aumentado, la percepción de los ciudadanos es que la situación se agudiza y la policía nacional no resuelve los problemas. La ciudadanía tiene que recurrir a otras formas de organización como las rondas campesinas, rondas urbanas, comités de autodefensa y a la seguridad privada.

**j. Proyecto de Ley 3552/2022-CR**

El proyecto de ley propone incluir al Coordinador Nacional de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Según la exposición de motivos, esto permitiría que la sociedad civil organizada participe directamente en la formulación de políticas públicas en seguridad, aportando su conocimiento territorial sobre el problema y sus posibles soluciones.

**k. Proyecto de Ley 4751/2022-CR**

La iniciativa legislativa propone modificar la Ley N° 27933 para incluir al presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. La exposición de motivos indica que la justificación de esta propuesta radica en la creciente inseguridad ciudadana y la necesidad de mayor participación del Congreso en la formulación de políticas públicas en esta materia. La iniciativa busca asegurar que las demandas ciudadanas sean representadas en el CONASEC, facilitando un enfoque legislativo en la planificación y evaluación de políticas de seguridad.

**l. Proyecto de Ley 6420/2023-CR**

La proposición normativa plantea modificar los artículos 5 y 7 de la Ley 27933 para que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana realice reuniones mensuales en lugar de cuatro veces al año, con al menos cuatro sesiones descentralizadas. La exposición de motivos indica que el objetivo es fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana, dado el alarmante incremento de la delincuencia en el país, especialmente en Lima, que concentra la mayor población urbana y presenta altos índices de criminalidad. Se fundamenta en datos sobre violencia en América Latina y el Perú, así como en la ineficacia del estado de emergencia. La propuesta busca retomar la disposición original de reuniones mensuales para mejorar la planificación y respuesta.

**m. Proyecto de Ley 8227/2023-CR**

La propuesta legislativa busca modificar la Ley N° 27933 para fortalecer el control y supervisión de su cumplimiento. Propone que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana informe obligatoriamente al Congreso sobre la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. La iniciativa responde a deficiencias en el funcionamiento del CONASEC, reflejadas en las omisiones de funciones.

**n. Proyecto de Ley 8418/2023-CR**

El proyecto propone que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana realice sesiones virtuales mensuales para mejorar la coordinación en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Argumenta que la frecuencia actual de reuniones (cuatro al año) es insuficiente, y que el uso de medios tecnológicos permitiría una toma de decisiones más ágil. Se basa en la autonomía funcional del CONASEC y en la necesidad de respuestas más efectivas ante el aumento de la criminalidad.

**o. Proyecto de Ley 10188/2024-CR**

La propuesta legislativa busca mejorar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana mediante la reforma de la Ley 27933. Para ello, plantea aumentar la frecuencia de las sesiones del CONASEC, reorganizar su estructura e implementar mecanismos de control y evaluación. Además, propone la creación del Órgano Técnico de Seguridad Ciudadana, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, para mejorar la coordinación entre sectores del Estado. También busca ampliar la participación del sector privado y la sociedad civil en la formulación de estrategias. Según la exposición de motivos, estas medidas buscan hacer más efectiva la lucha contra la criminalidad y fortalecer la seguridad en el país.

**p. Proyecto de Ley 10284/2024-CR**

El proyecto propone la inclusión de las Juntas Vecinales en el CONASEC, argumentando que las Juntas Vecinales, como actores clave en la seguridad ciudadana, han desarrollado estrategias de prevención con recursos propios y colaboración con la Policía Nacional. Se enfatiza que su participación permitiría una mejor articulación de esfuerzos para enfrentar la delincuencia y responder a las necesidades reales de la población. Además, plantea la inclusión de la Superintendencia Nacional de Migraciones dado su rol en el control del tránsito de extranjeros. Según la exposición de motivos, la ineficacia del actual sistema de seguridad y la creciente desconfianza en las instituciones públicas justifican la necesidad de un enfoque más participativo e integral.

## III. OPINIONES SOLICITADAS Y RECIBIDAS

### 3.1. Opiniones solicitadas

Para la elaboración del presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con los

artículos 22, literal b), 69 y 87 del Reglamento del Congreso de la República, se solicitó la opinión especializada a las siguientes entidades:

### a. Proyecto de Ley 29/2021-CR

| OFICIO | ENTIDAD | FECHA |
|---|---|---|
| Oficio N° 005-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Asociación de Municipalidades del Perú | 26.08.2021 |
| Oficio N° 346-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Reiterativo | 08.11.2021 |
| Oficio N° 006-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales | 26.08.2021 |
| Oficio N° 345-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Reiterativo | 08.11.2021 |
| Oficio N° 007-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Ministerio de Defensa | 26.08.2021 |
| Oficio N° 347-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Reiterativo | 08.11.2021 |
| Oficio N° 008-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Ministerio del Interior | 26.08.2021 |
| Oficio N° 009-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 26.08.2021 |
| Oficio N° 348-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Reiterativo | 08.11.2021 |
| Oficio N° 010-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Municipalidad Metropolitana de Lima | 26.08.2021 |
| Oficio N° 349-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Reiterativo | 08.11.2021 |
| Oficio N° 011-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Presidencia del Consejo de Ministros | 26.08.2021 |

### b. Proyecto de Ley 54/2021-CR

| OFICIO | ENTIDAD | FECHA |
|---|---|---|
| Oficio N° 040-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Ministerio del Interior | 31.08.2021 |
| Oficio N° 364-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Reiterativo | 08.11.2021 |
| Oficio N° 041-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 31.08.2021 |
| Oficio N° 365-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Reiterativo | 08.11.2021 |
| Oficio N° 042-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Presidencia del Consejo de Ministros | 31.08.2021 |
| Oficio N° 050-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Asociación de Municipalidades del Perú | 02.09.2021 |
| Oficio N° 363-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Reiterativo | 08.11.2021 |
| Oficio N° 043-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Municipalidad Metropolitana de Lima | 31.08.2021 |
| Oficio N° 366-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Reiterativo | 08.11.2021 |

### c. Proyecto de Ley 1000/2021-CR

| OFICIO | ENTIDAD | FECHA |
|---|---|---|
| Oficio N° 593-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Presidencia del Consejo de Ministros | 17.12.2021 |
| Oficio N° 594-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Defensoría del Pueblo | 17.12.2021 |
| Oficio N° 595-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Ministerio Público – fiscalía de la Nación | 17.12.2021 |
| Oficio N° 596-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Poder Judicial | 17.12.2021 |
| Oficio N° 597-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Ministerio del Interior | 17.12.2021 |
| Oficio N° 598-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 17.12.2021 |
| Oficio N° 599-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Ministerio de Defensa | 17.12.2021 |
| Oficio N° 600-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Municipalidad Metropolitana de Lima | 17.12.2021 |
| Oficio N° 601-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales | 17.12.2021 |
| Oficio N° 602-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Asociación de Municipalidades del Perú | 17.12.2021 |

### d. Proyecto de Ley 1059/2021-CR

| Oficio | Entidad | Fecha |
|---|---|---|
| Oficio N° 713-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales | 12.01.2022 |
| Oficio N° 714-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Municipalidad Metropolitana de Lima | 12.01.2022 |
| Oficio N° 715-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 12.01.2022 |
| Oficio N° 716-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Ministerio del Interior | 12.01.2022 |
| Oficio N° 717-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Ministerio Público – Fiscalía de la Nación | 12.01.2022 |
| Oficio N° 718-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Ministerio de Defensa | 12.01.2022 |
| Oficio N° 719-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Presidencia del Consejo de Ministros | 12.01.2022 |
| Oficio N° 720-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Poder Judicial | 12.01.2022 |

| | | |
|---|---|---|
| Oficio Nº 721-2021-2022/CDNOIDALCD-CR | Asociación de Municipalidades del Perú | 12.01.2022 |

## e. Proyecto de Ley 1464/2021-CR

| OFICIO | ENTIDAD | FECHA |
|---|---|---|
| Oficio N° 1040-2021-2022-CDNOIDALCD-CR | Ministerio de Defensa | 17.03.2022 |
| Oficio N° 1041-2021-2022-CDNOIDALCD-CR | Ministerio del Interior | 17.03.2022 |
| Oficio N° 1042-2021-2022-CDNOIDALCD-CR | Presidencia del Consejo de Ministros | 17.03.2022 |
| Oficio N° 1043-2021-2022-CDNOIDALCD-CR | Ministerio de Cultura | 17.03.2022 |
| Oficio N° 1044-2021-2022-CDNOIDALCD-CR | Presidente de AMPE | 17.03.2022 |
| Oficio N° 1045-2021-2022-CDNOIDALCD-CR | Presidente ANGR | 17.03.2022 |
| Oficio N° 1046-2021-2022-CDNOIDALCD-CR | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 17.03.2022 |

## f. Proyecto de Ley 1598/2021-CR

| OFICIO | ENTIDAD | FECHA |
|---|---|---|
| Oficio N° 1212-2021-2022-CDNOIDALCD/CR | Ministerio del Interior | 13.04.2022 |
| Oficio N° 1213-2021-2022-CDNOIDALCD/CR | Presidencia del Consejo de Ministros | 13.04.2022 |
| Oficio N° 1214-2021-2022-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Cultura | 13.04.2022 |
| Oficio N° 1215-2021-2022-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Justicia | 13.04.2022 |
| Oficio N° 1216-2021- 2022-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Defensa | 13.04.2022 |
| Oficio N° 1217-2021- 2022-CDNOIDALCD/CR | Asociación de Municipalidades del Perú | 13.04.2022 |
| Oficio N° 1218-2021- 2022-CDNOIDALCD/CR | Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales | 13.04.2022 |

## g. Proyecto de Ley 2041/2021-CR

| OFICIO | ENTIDAD | FECHA |
|---|---|---|
| Oficio N° 1438-2021-2022-CDNOIDALCD/CR | Ministerio del Interior | 25.05.2022 |
| Oficio N° 1439-2021-2022-CDNOIDALCD/CR | Presidencia del Consejo de Ministros | 25.05.2022 |
| Oficio N° 1440-2021-2022-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Cultura | 25.05.2022 |
| Oficio N° 1441-2021-2022-CDNOIDALCD/CR | Ministerio Justicia y Derechos Humanos | 25.05.2022 |
| Oficio N° 1442-2021-2022-CDNOIDALCD/CR | Asociación de Municipalidades del Perú | 25.05.2022 |
| Oficio N° 1443-2021-2022-CDNOIDALCD/CR | Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales | 25.05.2022 |

## h. Proyecto de Ley 2488/2021-CR

| OFICIO | ENTIDAD | FECHA |
|---|---|---|
| Oficio N° 017-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Presidencia del Consejo de Ministros | 19.08.2022 |
| Oficio N° 018-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Ministerio del Interior | 19.08.2022 |
| Oficio N° 019-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Economía y Finanzas | 19.08.2022 |
| Oficio N° 020-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales | 19.08.2022 |
| Oficio N° 021-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | AMPE | 19.08.2022 |
| Oficio N° 022-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Poder judicial | 19.08.2022 |
| Oficio N° 023-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Ministerio Publico | 19.08.2022 |
| Oficio N° 1079-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | PNP | 30.11.2022 |

## i. Proyecto de Ley 3349/2022-CR

| OFICIO | ENTIDAD | FECHA |
|---|---|---|
| Oficio N° 667-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Presidencia del Consejo de Ministros | 25.10.2022 |
| Oficio N° 668-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Asociación de Municipalidades del Perú | 25.10.2022 |
| Oficio N° 669-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales | 25.10.2022 |
| Oficio N° 670-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Ministerio del Interior | 25.10.2022 |

| | | |
|---|---|---|
| Oficio N° 671-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 25.10.2022 |
| Oficio N° 672-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Economía y Finanzas | 25.10.2022 |
| Oficio N° 673-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Programa Nacional de Bienes Incautados | 25.10.2022 |
| Oficio N° 674-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Superintendencia Nacional de Bienes Estatales | 25.10.2022 |
| Oficio N° 675-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Ministerio Público | 25.10.2022 |

## j. Proyecto de Ley 3552/2022-CR

| OFICIO | ENTIDAD | FECHA |
|---|---|---|
| Oficio N° 936-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Presidencia del Consejo de Ministros | 20.11.2022 |
| Oficio N° 937-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Ministerio del Interior | 20.11.2022 |
| Oficio N° 938-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Economía y Finanzas | 20.11.2022 |
| Oficio N° 939-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Asociación de Municipalidades del Perú | 20.11.2022 |
| Oficio N° 940-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales | 20.11.2022 |
| Oficio N° 941-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Defensoría del Pueblo | 20.11.2022 |
| Oficio N° 942-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Justicia | 20.11.2022 |

## k. Proyecto de Ley 4751/2022-CR

| OFICIO | ENTIDAD | FECHA |
|---|---|---|
| Oficio N° 2435-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Ministerio del Interior | 25.04.2023 |
| Oficio N° 2436-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Defensoría del Pueblo | 25.04.2023 |
| Oficio N° 2437-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Presidencia del Consejo de Ministros | 25.04.2023 |
| Oficio N° 2438-2022-2023-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Justicia | 25.04.2023 |

## l. Proyecto de Ley 6420/2023-CR

| OFICIO | ENTIDAD | FECHA |
|---|---|---|
| Oficio N° 1065-2023-2024-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Defensa | 23.11.2023 |
| Oficio N° 1066-2023-2024-CDNOIDALCD/CR | Ministerio del Interior | 23.11.2023 |
| Oficio N° 1067-2023-2024-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 23.11.2023 |
| Oficio N° 1068-2023-2024-CDNOIDALCD/CR | Defensoría del Pueblo | 23.11.2023 |
| Oficio N° 1069-2023-2024-CDNOIDALCD/CR | Presidencia del Consejo de Misnistros | 23.11.2023 |
| Oficio N° 1070-2023-2024-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Economía y Finanzas | 23.11.2023 |

## m. Proyecto de Ley 8227/2023-CR

| OFICIO | ENTIDAD | FECHA |
|---|---|---|
| Oficio N° 2764-2023-2024-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Economía y Finanzas | 26.06.2024 |
| Oficio N° 2765-2023-2024-CDNOIDALCD/CR | Ministerio del Interior | 26.06.2024 |
| Oficio N° 2766-2023-2024-CDNOIDALCD/CR | Presidencia del Consejo de Ministros | 26.06.2024 |
| Oficio N° 2767-2023-2024-CDNOIDALCD/CR | Asociación de Municipalidades del Perú | 26.06.2024 |
| Oficio N° 2768-2023-2024-CDNOIDALCD/CR | Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales | 26.06.2024 |
| Oficio N° 2769-2023-2024-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 26.06.2024 |
| Oficio N° 2770-2023-2024-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Educación | 26.06.2024 |
| Oficio N° 2771-2023-2024-CDNOIDALCD/CR | Ministerio Publico | 26.06.2024 |
| Oficio N° 2772-2023-2024-CDNOIDALCD/CR | Defensoría del Pueblo | 26.06.2024 |

## n. Proyecto de Ley 8418/2023-CR

| OFICIO | ENTIDAD | FECHA |
|---|---|---|
| Oficio N° 126-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Presidencia del Consejo de Ministros | 25.08.2024 |
| Oficio N° 127-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Ministerio del Interior | 25.08.2024 |

| | | |
|---|---|---|
| Oficio N° 128-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 25.08.2024 |
| Oficio N° 129-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Educación | 25.08.2024 |
| Oficio N° 130-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Salud | 25.08.2024 |
| Oficio N° 131-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Economía y Finanzas | 25.08.2024 |
| Oficio N° 132-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | 25.08.2024 |
| Oficio N° 133-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | 25.08.2024 |
| Oficio N° 134-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | 25.08.2024 |
| Oficio N° 135-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | 25.08.2024 |
| Oficio N° 136-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Poder Judicial | 25.08.2024 |
| Oficio N° 137-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Ministerio Publico | 25.08.2024 |
| Oficio N° 138-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Defensoría del Pueblo | 25.08.2024 |
| Oficio N° 139-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales | 25.08.2024 |
| Oficio N° 140-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Municipalidad Metropolitana de Lima | 25.08.2024 |
| Oficio N° 141-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Asociación de Municipalidades del Perú | 25.08.2024 |
| Oficio N° 142-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Policía Nacional del Perú | 25.08.2024 |
| Oficio N° 143-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Instituto Nacional Penitenciario | 25.08.2024 |
| Oficio N° 144-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Consejo de la Prensa Peruana | 25.08.2024 |
| Oficio N° 145-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Asociación de Seguridad Privada del Perú | 25.08.2024 |
| Oficio N° 146-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú | 25.08.2024 |
| Oficio N° 147-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida son drogas | 25.08.2024 |
| Oficio N° 148-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | CGBVP | 25.08.2024 |

### o. Proyecto de Ley 10188/2024-CR

| OFICIO | ENTIDAD | FECHA |
|---|---|---|
| Oficio N° 1232-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Presidencia del Consejo de Ministros | 14.02.2025 |
| Oficio N° 1233-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Ministerio del Interior | 14.02.2025 |
| Oficio N° 1234-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 14.02.2025 |
| Oficio N° 1235-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Poder Judicial | 14.02.2025 |
| Oficio N° 1236-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Ministerio Público | 14.02.2025 |
| Oficio N° 1237-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales | 14.02.2025 |
| Oficio N° 1238-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Asociación de Municipalidades del Perú | 14.02.2025 |

### p. Proyecto de Ley 10284/2024-CR

| OFICIO | ENTIDAD | FECHA |
|---|---|---|
| Oficio N° 1308-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Presidencia del Consejo de Ministros | 24.02.2025 |
| Oficio N° 1309-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Ministerio del Interior | 24.02.2025 |
| Oficio N° 1310-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Defensa | 24.02.2025 |
| Oficio N° 1311-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Ministerio de Economía y Finanzas | 24.02.2025 |
| Oficio N° 1312-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | SUCAMEC | 24.02.2025 |
| Oficio N° 1313-2024-2025-CDNOIDALCD/CR | Superintendencia Nacional de Migraciones | 24.02.2025 |

## 3.2. Opiniones recibidas

Al momento de elaborar el presente dictamen se recibieron las opiniones que se detallan a continuación:

### a. Proyecto de Ley 29/2021-CR

1. La **Presidencia del Consejo de Ministros** mediante Oficio N° D002275-2021-PCM-SG, de fecha 8 de setiembre de 2021, remite el Informe N° D001360-2021-PCM-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

2. El **Ministerio del Interior** a través del Oficio N° 000896-2021/IN/DM, de fecha 20 de setiembre de 2021, remitió el Informe N° 001371-2021/IN/OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

3. La **Municipalidad Metropolitana de Lima** mediante Oficio N° D000753-2021-MML-SGC, de fecha 12 de noviembre de 2021 remitió, entre otros, el Informe N° D000881-2021-MML-GAJ, elaborado por la Gerencia de Asuntos Jurídicos.

4. El **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos** a través del Oficio N° 2355-2021-JUS/SG, de fecha 19 de noviembre de 2021, remitió el Informe Técnico N° 046-2021-JUS/DGAC, elaborado de la Dirección General de Asuntos Criminológicos.

5. La **Asociación de Seguridad Privada del Perú ASEPRI,** mediante documento N° 07-2022, del 4 de abril de 2022, remitió su opinión.

6. La **Oficina de Participación Ciudadana**, mediante Oficio N° 2076-2022-OPC-OM-CR del 7 de abril de 2022, remite la opinión recibida a través del Foro Legislativo Virtual, la misma que puede verse en https://bit.ly/3uYA10C

**b. Proyecto de Ley 054/2021-CR**

1. La **Presidencia del Consejo de Ministros** mediante Oficio N° D002305-2021-PCM-SG, de fecha 13 de setiembre de 2021, remitió el Informe N° D001371-2021-PCM-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

2. El **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos** a través del oficio N° 735-2021-JUS/DM, de fecha 15 de noviembre de 2021, remitió el Informe Técnico N° 045-2021-JUS7DSAC, elaborado por la Dirección General de Asuntos Criminales.

3. El **Ministerio del Interior** mediante Oficio N° 001090-2021/IN/DM, de fecha 17 de noviembre de 2021, remitió el Informe N° 001603-2021/IN/OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

4. La **Oficina de Participación Ciudadana** a través de los Oficios N° 2605-2021-OPC-OM-CR y 2879-2021-OPC-OM-CR, de fecha 15 de setiembre y 12 de octubre de 2021, respectivamente, remitió las opiniones recibidas a través del Foro Legislativo Virtual, las mismas que pueden ser visualizadas en los siguientes links:
https://wb2server.congreso.gob.pe/participacion-ciudadana-portal/#/informe-mensua/2021/54/202108

https://wb2server.congreso.gob.pe/participacion-ciudadana-portal/#/informe-mensual/2021/54/202109

**c. Proyecto de Ley 1000/2021-CR**

1. El **Ministerio Público – Fiscalía de la Nación** mediante Oficio N° 000272-2022-MP-FN-SEGFIN, de fecha 24 de enero de 2022, remitió el Informe N° 004-MP-FN-FSTEPDcCn, elaborado por la Fiscalía Superior Transitoria Especializada en Prevención del Delito con Competencia Nacional del Distrito Fiscal de Lima.

2. La **Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales** remitió el Oficio N° 123-2022-ANGR/P, de fecha 23 de febrero de 2022, suscrito por el Presidente de la ANGR.

3. La **Municipalidad Metropolitana de Lima** a través del Oficio N° D000075-2022-MML-SGC, de fecha 9 de febrero de 2022, remitió el Informe N° D000083-2022-MML-GAJ, elaborado por la Gerencia de Asuntos Jurídicos.

4. La **Presidencia del Consejo de Ministros** mediante Oficio N° D001183-2022-PCM-SG, de fecha 19 de mayo de 2022, remitió el Informe N° D000691-2022-PCM-OGAJ, elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica.

5. El **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos** a través del Oficio N° 1607-2022-JUS/SG, de fecha 22 de junio de 2022, remitió el Informe Técnico N° O44-2022-JUS/DGAC, elaborado por la Dirección General de Asuntos Criminológicos.

6. La **Defensoría del Pueblo** mediante Oficio N° 458-2022-DP/PAD del 14 de julio del 2022, remitió el Informe Jurídico Especializado N° 005-2022-DP/ADHPD elaborado por la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.

7. La **Oficina de Participación Ciudadana**, mediante Oficio N° 0287-2022-OPC-OM-CR del 11 de enero de 2022, remite la opinión recibida a través del Foro Legislativo Virtual, la misma que puede verse https://bit.ly/3q3RMu7

**d. Proyecto de Ley 1059/2021-CR**

1. El **Ministerio del Interior** mediante Oficio N° 000777-2022/IN/DM, de fecha 11 de octubre de 2022, remitió el Informe N° 001841-2022/IN/OGAJ elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

2. El **Poder Judicial** a través del Oficio N° 000400-2022-SG-CS-PJ, de fecha 8 de febrero de 2022, remitió el Informe N° 000042-2022-GA-P-PJ, elaborado por la Jefatura del Gabinete de Asesora.

3. La **Municipalidad Metropolitana de Lima** mediante Oficio N° D000137-2022-MML-SGC, de fecha 21 de febrero de 2022, remitió el Informe N° D000161-2022-GAJ, elaborado por la Gerencia de Asesoría Jurídica.

4. La **Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales de Perú** mediante Oficio N°433-2022-ANGRP, de fecha 11 de abril de 2022, remitió su opinión institucional.

5. La **Presidencia del Consejo de Ministros** a través del Oficio N° D001229-2022-PCM-SG, de fecha 26 de mayo de 2022, remitió el Informe N° D000724-2022-PCM-OGAJ, elaborado por Oficina General de Asesoría Jurídica.

6. El **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos** mediante Oficio N° 2930-2022-JUS/SG, de fecha 04 de noviembre de 2022, remitió el Informe Técnico N° 171-2022-JUS/DGAC, elaborado por la Dirección General de Asuntos Criminológicos.

**e. Proyecto de Ley 1464/2021-CR**

1. La **Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales de Perú** mediante Oficio N° 488-2022-ANGR, de fecha 18 de abril de 2022, remitió su opinión institucional.

2. El **Ministerio de Cultura** a través del Oficio N° 000578-2022-DM/MC, de fecha 9 de junio de 2022, remitió el Informe N° 000671-2022-OGAJ/MC, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

3. El **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos** mediante Oficio N° 2532-2022-JUS-SG, de fecha 22 de setiembre de 2022, remitió el Informe Técnico N° 158-2022-JUS/DGAC, elaborado por la Dirección General de Asuntos Criminológicos.

4. La **Oficina de Participación Ciudadana**, mediante el Oficio N° 2089-2022-OPC-OM-CR, de fecha 7 de abril de 2022, remitió la opinión recibida a través del Foro Legislativo Virtual, la misma que puede verse en https://bit.ly/3j26H3p

**f. Proyecto de Ley 1598/2021-CR**

1. La **Presidencia del Consejo de Ministros** mediante Oficio N° D000947-2022-PCM-SG, de fecha 27 de abril de 2022, remitió el Informe N° D000567-2022-PCM-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

2. El **Ministerio de Cultura** a través del Oficio N° 000574-2022-DM/MC, de fecha 9 de junio de 2022, remitió, entre otros, el Informe N° 000653-2022-OGAJ/MC, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

3. La **Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales**, remitió el Oficio N° 716-2022 ANGR/P, de fecha 6 de junio de 2022.

4. El **Ministerio del Interior** mediante Oficio N° 000712-2022/IN-DM, de fecha 15 de setiembre de 2022, remitió el Informe N° 001679-2022/IN/OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

5. El **Ministerio de Defensa** a través del Oficio N° 01127-2022-MINDEF/DM, de fecha 5 de diciembre del 2022, remitió el Informe Legal N° 01974-2022-MINDEF/SG-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica

6. El **Ministerio de Cultura** mediante Oficio N° 000574-2022-DM/MC, de fecha 9 de junio del 2022, remitió el Informe Legal N° 000653-2022-OGAJ/MC, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

**g. Proyecto de Ley 2041/2021-CR**

1) La **Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales** remitió el Oficio N° 765-2022-ANGR/P, de fecha 21 de julio de 2022, suscrito por su Presidente.

2) La **Presidencia del Consejo de Ministros** mediante Oficio N° D001961-2022-PCM-SG, de fecha 9 de agosto de 2022, remitió el Informe N° D001147-2022-PCM-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asuntos Jurídicos.

3) El **Ministerio de Cultura** a través del Oficio N° 000468-2022-SG/MC, de fecha 2 de setiembre de 2022, remitió el Informe N° 001025-2022-OGAJ/MC, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

4) El **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos** mediante Oficio N° 2365-2022-JUS/SG, de fecha 7 de setiembre de 2022, remitió el Informe N° 152-2022-JUS/DGAC, elaborado por la Dirección General de Asuntos Criminológicos.

5) El **Ministerio del Interior** a través del Oficio N° 002231-2023/IN/SG, de fecha 1 de junio de 2023, remitió el Informe N° 001063-2023/IN/OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica

6) La **Oficina de Participación Ciudadana** mediante el Oficio N° 3393-2022-OPC-OM-CR, de fecha 6 de junio de 2022, remitió las opiniones recibidas a través del Foro Legislativo Virtual, las mismas que pueden verse en el siguiente enlace: https://bit.ly/3GNkbuWD.

**h. Proyecto de Ley 2488/2021-CR**

1) La **Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales** remitió el Oficio N° 1129-2022-ANGR/P, de fecha 7 de noviembre de 2022, suscrito por su Presidente.

2) La **Fiscalía de la Nación** mediante Oficio N° 002369-2023-MP-FN-SEGFIN, de fecha 19 de mayo 2023, remitió el oficio N° 002703'2023-MP-FN-PJFSLIMA.

3) El **Ministerio del Interior** a través del Oficio N° 001688-2023/IN/SG, de fecha 25 de abril de 2023, remitió el Informe N° 000802-2023/IN/OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

4) La **Presidencia del Consejo de Ministros** mediante Oficio N° D002179-2022-PCM-SG, de fecha 2 de septiembre de 2022, remitió el Informe N° D001261-2022-PCMOGAJ, elaborado por la Oficina General de Asuntos Jurídicos.

**i. Proyecto de Ley 3349/2022-CR**

1. La **Superintendencia Nacional de Bienes Estatales** remitió el Oficio N° 00828-2022/SBN, de fecha 04 de noviembre de 2022.

2. La **Fiscalía de la Nación** mediante Oficio N° 001240-2023-MP-FN-SEGFIN, de fecha 13 de marzo del 2023, remitió el Informe N° 089-2022-MP-FN-FSTEPDcCNyCNFPD, elaborado por la Coordinación Nacional de las Fiscalías en Prevención del Delito.

3. El **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos** a través del oficio N° 579-2023-JUS/SG, de fecha 29 de febrero del 2023, remitió el Informe Técnico N° 032-2023-JUS/DGAC, elaborado por la Dirección General de Asuntos Criminológicos.

4. La **Presidencia del Consejo de Ministros** mediante Oficio N° D000876-2023-PCM-SG, de fecha 30 de marzo del 2023, remitió el Informe N° D000425-2023-PCMOGAJ elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

5. El **Ministerio de Economía y Finanzas** a través del Oficio N° 2634-2024-EF/10.01, de fecha 11 de octubre de 2024, remitió el Informe N° 0725-2024-EF/50.04, elaborado por la Dirección General de Presupuesto Público.

**j. Proyecto de Ley 3552/2022-CR**

1. La **Presidencia del Consejo de Ministros** mediante Oficio N° D003212-2023-PCM-SG, de fecha 1 de diciembre del 2022, remitió el Informe N° D001762-2022-PCM-OGAJ elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

2. El **Ministerio de Economía y Finanzas** a través del oficio N° 819-2023-EF/10.01, de fecha 8 de mayo del 2023, remitió el Informe N° 0388-2023-

EF/42.02, elaborado por la Oficina de Asuntos Jurídicos Económicos y Administrativos de la Oficina General de Asesoría jurídica.

**k. Proyecto de Ley 4751/2022-CR**

1. La **Presidencia del Consejo de Ministros** mediante Oficio N° D001739-2023-PCM-SG, de fecha 15 de junio del 2023, remitió el Informe N° D000843-2023-PCMOGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

2. El **Ministerio del interior** a través del Oficio N° 002839-2023/IN/SG, de fecha 11 de julio de 2023, remitió el Informe N° 001486-2023/IN/OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

**l. Proyecto de Ley 6420/2023-CR**

1. El **Ministerio de Economía y Finanzas** a través del Oficio N° 2681-2023-EF/10.01, de fecha 27 de diciembre de 2023, remitió el Informe N° 1101-2023-EF/42.02, elaborado por la Oficina de Asuntos Jurídicos Económicos y Administrativos de la Oficina General de Asesoría Jurídica.

2. El **Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo** mediante Oficio N° 000165-2024-MTPE/4, de fecha 22 de enero del 2024, remitió el Informe N° 000045-2024-MTPE/4/8, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

3. La **Presidencia del Consejo de Ministros** a través del Oficio N° D000215-2024-PCM-SG, de fecha 2 de febrero de 2024, remitió el Informe N° D000163-2024-PCMOGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

4. El **Ministerio de Vivienda y Construcción** mediante Oficio N° 076 -2024-VIVIENDA/DM, de fecha 16 de febrero de 2024, remitió, entre otros, el Informe N° 118-2024-VIVIENDA/OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

5. El **Ministerio del Interior** mediante Oficio N° 002521-2024-IN-SG, de fecha 11 de marzo de 2024, remitió el Informe N° Informe N° 000425-2024-IN-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

6. El **Ministerio de Defensa** a través del oficio N° 00372-2024-MINDEF/DM, de fecha 22 de marzo de 2024, remitió el Informe Legal N° 00329-2024-MINDEF/SG-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

7. El **Ministerio de Cultura** mediante Oficio N° 000703-2024-DM/MC, de fecha 14 de junio de 2024, remitió el Informe N° 000820-2024-OGAJ-SG/MC, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

8. El **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos** a través del Oficio N° 3855-2024-JUS/SG, de fecha 4 de octubre de 2024, remitió el Informe Técnico N° 000291-2024-JUS/DGAC, elaborado por la Dirección General de Asuntos Criminológicos.

**m. Proyecto de Ley 8227/2023-CR**

1. La **Asociación de Municipalidades del Perú** a través del Oficio N° 370-2024-AMPE/P, de fecha 2 de julio de 2024, remitió el informe N°0109-2024-AMPE/AJ, elaborado por la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica.

2. El **Ministerio de Economía y Finanzas** a través del Oficio N° 1500-2024-EF/10.01, de fecha 5 de julio de 2024, remitió el Informe N° 0617-2024-EF/42.02, elaborado por la Oficina de Asuntos Jurídicos Económicos y Administrativos de la Oficina General de Asesoría Jurídica.

3. El **Ministerio de Educación** mediante Oficio N° 02173-2024-MINEDU/SG, de fecha 17 de setiembre de 2024, remitió el Informe N° 001102-2024-MINEDU/SG-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación.

4. El **Ministerio del Interior** mediante Oficio N° 001041-2024-IN-SG-PCR, de fecha 24 de septiembre de 2024, remitió el Informe N° 001544-2024-IN-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

5. El **Ministerio Público** a través del Oficio N° 005477-2024-MP-FN-SEGFIN, de fecha 11 de noviembre de 2024, remitió el Informe N° 000051-2024-MP-FN-CN-FISPREV, elaborado por la Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en prevención del delito.

6. La **Presidencia del Consejo de Ministros** mediante Oficio N° D002441-2024-PCM-SG, de fecha 11 de diciembre de 2024, remitió el Informe N° D001824-2024-PCMOGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

7. El **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos** a través del Oficio N° 5144-2024-JUS/SG, de fecha 26 de diciembre de 2024, remitió el Informe Técnico N° 000359-2024-JUS/DGAC, elaborado por la Dirección General de Asuntos Criminológicos

**n. Proyecto de Ley 8418/2023-CR**

1. El **Ministerio de Economía y Finanzas** mediante Oficio N° 2089-2024-EF/10.01, de fecha 6 de septiembre de 2024, remitió el Informe N° 0796-2024-EF/42.02 elaborado por la Oficina de Asuntos Jurídicos Económicos y Administrativos de La Oficina General de Asesoría Jurídica.

2. La **Asociación de Municipalidades del Perú** a través del Oficio N° 592-2024-AMPE/P, de fecha 7 de setiembre de 2024, remitió el informe N° 0320-2024-AMPE/AJ de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica.

3. El **Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables** mediante Oficio N° D001542-2024-MIMP-SG, de fecha 13 de setiembre de 2024, remitió el Informe N° D000520-2024-MIMP-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

4. El **Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social** a través del Oficio N° D000687-2024-MIDIS-DM, de fecha 22 de setiembre de 2024, remitió el Informe de Trabajo N° D000406-2024-MIDIS-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

5. La **Municipalidad de Lima Metropolitana** mediante Oficio D000518-2024-MML-OGSC, de fecha 25 de setiembre de 2024, remitió el Informe N° 665-2024-MML-GSGC-EAL, elaborado por el Coordinador del Equipo de Asesoría Legal.

6. El **Ministerio del Interior** a través del Oficio N° 001065-2024-IN-SG-PCR, de fecha 26 de setiembre de 2024, remitió el Informe N° 001656-2024-IN-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

7. El **Ministerio de Salud** mediante Oficio N° D002789-2024-DM, de fecha 27 de setiembre de 2024, remitió el Informe N° D000913-2024-OGAJ-MINSA elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

8. La **Presidencia del Consejo de Ministros** a través del Oficio N° D001947-2024-PCM-SG, de fecha 30 de setiembre de 2024, remitió el Informe N° D001443-2024-PCM-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

9. El **Instituto Nacional Penitenciario** mediante Oficio N° D000982-2024-INPE-PRE, de fecha 30 de setiembre de 2024, remitió el oficio N° D000424-INPE-DISEPE, elaborado por la Dirección de Seguridad Penitenciaria.

10. El **Ministerio Público** a través del Oficio N° 005003-2024-MP-FN-SEGFIN, de fecha 22 de octubre de 2024, remitió el Informe N° 000071-2024-MP-FN-CN-FISPREV, elaborado por la Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Prevención del Delito.

11. El **Ministerio de Comercio Exterior y Turismo** mediante Oficio N° 649-2024-MINCETUR/DM, de fecha 24 de octubre de 2024, remitió el Informe Legal N° 0007-2024-MINCETUR/SG-AJ-KEA, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

12. El **Ministerio de Educación** a través del Oficio N° 02556-2024-MINEDU/SG, de fecha 7 de noviembre de 2024, remitió el Informe N° 01486-

2024-MINEDU/SG-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

13. El **Ministerio de Transportes y Comunicaciones** mediante Oficio N° 3088-2024-MTC/04, de fecha 19 de diciembre de 2024, remitió el Informe N° 1929-2024-MTC/08, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

**o. Proyecto de Ley 10188/2024-CR**

1. La **Asociación de Municipalidades del Perú** mediante Oficio N° 00051-2025-AMPE/P, de fecha 27 de febrero de 2025, remitió el Informe N° 0072-2025-AMPE/AJ elaborado por la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica - AMPE.

## IV. MARCO NORMATIVO

### 4.1 Legislación nacional

- Constitución Política del Perú.
- Reglamento del Congreso de la República.
- Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
- Decreto Supremo N° 011-2014-IN, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
- Ley N° 28863, Ley que modifica artículos de la Ley 27933.
- Ley N° 30055, Ley que Modifica la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y la Ley y 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Decreto Legislativo N° 1316 que modifica la Ley 27933.
- Decreto Legislativo 1618 que modifica la Ley 27933.
- Ley N° 29701, Ley que dispone beneficios a favor de los integrantes de las Juntas Vecinales y establece el día de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana
- Decreto Supremo N° 002-2013-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley 29701.
- Ley N° 29010, Ley que faculta a los gobiernos regionales y gobiernos locales a disponer recursos a favor de la Policía Nacional del Perú.
- Decreto Legislativo 1147, Decreto Legislativo que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas
- Decreto Legislativo Nº 1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior
- Decreto Legislativo Nº 1241 que Fortalece la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas
- Decreto Legislativo N° 1129, Decreto Legislativo que regula el Sistema de Defensa Nacional.

- Decreto Supremo N° 025-2003-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley 27908.

### 4.2 Normas convencionales

TRATADOS INTERNACIONALES
- Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, artículo 3.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966, artículo 9.

## V. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS

### 5.1 Análisis del marco normativo y efecto de la vigencia de la norma

El artículo 1 de la Constitución Política del Perú establece que *la defensa de la* ***persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado***.

Al respecto, en los fundamentos 5 y 6 de la sentencia recaída en el Expediente N° 2273-2005-PHC/TC, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente:

> *5. Conforme a la Constitución Política del Perú, la dignidad del ser humano no sólo representa el valor supremo que justifica la existencia del Estado y de los objetivos que este cumple, sino que se constituye como el fundamento esencial de todos los derechos que, con la calidad de fundamentales, habilita el ordenamiento (...).*
> *6. Existe, pues, en la dignidad, un indiscutible rol de principio motor sin el cual el Estado adolecería de legitimidad, y los derechos de un adecuado soporte direccional. Es esta misma lógica la que, por otra parte, se desprende de los instrumentos internacionales relativos a Derechos Humanos, que hacen del principio la fuente directa de la que dimanan todos y cada uno de los derechos del ser humano (...).*

Así, el máximo intérprete de la Constitución ha señalado que la dignidad humana fundamenta el contenido de cada derecho fundamental, impone al Estado diversas obligaciones, tanto de protección como de promoción, es decir, el Estado y la sociedad se encuentran al servicio de la persona humana.

Las obligaciones que se desprenden de la dignidad humana están dirigidas tanto al poder público como a los poderes privados e incluso a cada ciudadano. Todos sin excepción, tienen el deber constitucional de respetar y defender la dignidad de la persona humana. Asimismo, su optimización y promoción, si bien vincula a todos, es un mandato dirigido principalmente al poder público.

El numeral 24 del artículo 2 de la Carta Fundamental, señala que toda persona tiene derecho a la libertad y a la **seguridad personales**. Este derecho también

se encuentra reconocido en normas internacionales, tales como el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que contempla que: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; igualmente está reconocido en el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. La violación a algún derecho en los mencionados instrumentos internacionales por parte de nuestro país puede en su caso traer como consecuencia su responsabilidad frente a la comunidad internacional y por ende sanciones internacionales para el Estado.

En ese sentido, la seguridad es un derecho fundamental que, en un Estado Democrático de Derecho como el nuestro, consiste en el conjunto de garantías que debe brindar el Estado a los ciudadanos para el libre ejercicio de todos los demás derechos.

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) define a la seguridad ciudadana como: "aquella situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos humanos y en la que existen mecanismos institucionales eficientes para prevenir y controlar las amenazas o coerciones ilegítimas que pueden lesionar tales derechos. El derecho a la seguridad ciudadana en un Estado Democrático y de Derecho, consiste en el conjunto de garantías que debe brindar el Estado a sus habitantes para el libre ejercicio de todos sus derechos"[1].

Por otro lado, el primer párrafo del artículo 44 de la Constitución Política del Perú, precisa que **son deberes primordiales del Estado**: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; **proteger a la población de las amenazas contra su seguridad**; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

Este deber del Estado halla sustento en el artículo 1 de la propia Constitución, por el cual, ante amenazas contra la seguridad, el Estado se encuentra obligado a elaborar, desarrollar y ejecutar políticas públicas a fin de brindar a la población las condiciones necesarias para garantizar su seguridad.

La previsión de este deber se justifica en la medida que entre los derechos fundamentales y el Estado Social y democrático de Derecho se da un estrecho nexo de interdependencia: El Estado social, para ser considerado como tal, tiene que respetar y garantizar los derechos fundamentales; y, a la inversa, los derechos fundamentales, para su realización, precisan la existencia del Estado social y democrático de derecho.

---

1 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH): Seguridad ciudadana en América Latina. Una propuesta del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, pág. 3-4. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José, Costa Rica, 2000.

En virtud de la norma citada, corresponde al Estado ejecutar acciones destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos humanos en sociedad, así como proteger su seguridad de cualquier amenaza, promoviendo el bienestar de la población en general, lo cual sólo es posible si, ante determinadas circunstancias que ponen en grave riesgo el disfrute de los derechos antes mencionados, se adoptan medidas necesarias y urgentes.

La aspiración de la ciudadanía para vivir en un ambiente de tranquilidad y paz donde la persona humana sea el fin supremo de la sociedad y donde pueda desarrollarse a plenitud, ha demandado y demanda la implementación de la inmediata seguridad ciudadana, en base a un conjunto de medidas y previsiones que se deben adoptar a través de las autoridades, con la participación de la población organizada, a fin de garantizar la vida, la integridad física, la libertad, la propiedad y demás derechos fundamentales de las personas.

La inseguridad ciudadana es uno de los problemas más relevantes para la población de los países de la región, entre ellos el nuestro, y una de las principales sombras que amenazan la construcción de una convivencia pacífica. Constantemente se alerta sobre el aumento de tasas de violencia y del fenómeno de la criminalidad que afecta a la ciudadanía de todos los estratos sociales sin distinción. Sin embargo, las políticas de Estado destinadas a hacerle frente son aún insuficientes.

Según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la política pública sobre seguridad ciudadana es "*un instrumento de planificación, que permite la racionalización de los recursos disponibles, en un marco de permanente participación de los actores sociales involucrados". En este sentido, se señala que esta política pública debe ser integral (por abarcar sistemáticamente los derechos humanos en su conjunto); intersectorial (por comprometer acciones, planes y presupuestos de diferentes actores estatales); participativa (por la intervención permanente de la población involucrada y por favorecer la democratización de la sociedad); universal (por su cobertura sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo); e intergubernamental (por comprometer entidades de los gobiernos centrales y locales). Y, especialmente, esta política pública sobre seguridad ciudadana "debe incorporar los estándares de derechos humanos como guía y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del Estado*[2].

El Acuerdo Nacional suscrito el 22 de julio 2002, entre los partidos políticos, definió 30 Políticas de Estado. La séptima política de Estado se refiere a: "La erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana". (Acuerdo Nacional, 2004, págs. 3 y 4). En este foro nacional, los partidos políticos se comprometieron a: "fortalecer el orden público, el respeto al libre ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes individuales. (Acuerdo Nacional, 2004, págs. 3 y 4).

---

2 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH): Derechos humanos, seguridad ciudadana y funciones policiales, pág. 28. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Chile, 2011.

En este contexto, se promulgó la Ley N° 27933 del 12 de febrero 2003, ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que en su artículo 9 define como una de las funciones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana: establecer las políticas y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana; así como aprobar los planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana. En cumplimiento a esta normativa el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana a partir del año 2003 formula los Planes Nacionales de Seguridad Ciudadana.

Se puede constatar como características que inciden en la ejecución de los Planes Nacionales de Seguridad Ciudadana, a la limitada asignación de presupuesto por los sectores involucrados para ejecutar las acciones correspondientes a la seguridad, así como el bajo nivel de cumplimiento, monitoreo y seguimiento de las actividades programadas debido principalmente a la inestabilidad política en el cargo del Ministro del Interior, responsable del seguimiento de las políticas públicas de seguridad ciudadana.

En junio de 2019, a través del Decreto Supremo N° 013-2019-IN, el Ministerio del Interior aprobó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 – 2023, el cual sería el principal instrumento de gestión del Estado peruano para orientar la implementación de la política pública para fortalecer la seguridad de la población frente a un conjunto de violencias y delitos en el territorio nacional, ello en el marco de la Política General de Gobierno al 2021 aprobada por Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM. Sin embargo, el 16 de octubre de 2021 se publicó el Decreto Supremo 164-2021-PCM, el cual aprueba la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026, cuyo eje 6 está referido al fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo.

Por otra parte, el 21 de junio de 2022, el Ministerio del Interior, a través del Decreto Supremo 006-2022-IN aprobó la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030, el cual constituye el principal instrumento de planificación estratégica del Estado en materia de seguridad ciudadana, su objetivo, entre otros, es la prevención de delitos y violencia.

Sin embargo, pese a los esfuerzos, el tema de la inseguridad ciudadana constituye un problema que preocupa a la sociedad en general. De allí que se encuentre justificado que el Estado emita normas que tengan por finalidad coadyuvar con la prevención de actos delictivos.

## 5.2 Análisis de las opiniones e información solicitada

### a. Proyecto de Ley 29/2021-CR

1. La **Presidencia del Consejo de Ministros** sostiene que el proyecto de ley contiene materias que no se encuentran relacionadas con las funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, sino dentro del ámbito de competencias del Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa.

2. El **Ministerio del Interior** concluye que la iniciativa legislativa debe ser **reevaluada**, en mérito a las opiniones del Viceministerio de Seguridad Pública y Viceministerio de Orden Interno, áreas que consideran que la propuesta planteada **no es viable**, puesto que, de acuerdo a la normativa vigente, corresponde al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional, como organismos responsables de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades; asimismo, porque la finalidad de la Marina de Guerra del Perú no está directamente relacionada con el trabajo permanente del CONASEC, que es el asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. Señala que la actual legislación (artículo 8 de la Ley N° 27933, en concordancia con el artículo 11 de su Reglamento) ya permite la participación de la Marina en el CONASEC cuando su especialidad lo amerite, sin necesidad de modificar la ley.

3. La **Municipalidad Metropolitana de Lima**, considerando la opinión del área de Gerencia de Seguridad Ciudadana, sostiene que el proyecto de ley **es viable**, toda vez que, las funciones de La Marina de Guerra del Perú -Decreto Legislativo N° 1138 y Decreto Legislativo N° 1241-, se concatenan con el objeto y finalidad de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que busca, entre otros, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional. Recomienda incluir al Ministro de Defensa en el CONASEC debido a la relación de dependencia de la MGP con dicha cartera ministerial.

4. El **Ministerio de Defensa,** concluye que la iniciativa legislativa requiere ser **reformuiada** pues si bien coincide con la posición de la Marina de Guerra sobre la necesidad de reforzar la vigilancia y control del medio acuático sin requerir una declaratoria de emergencia, advierte deficiencias en la fundamentación del proyecto, particularmente en el análisis de las atribuciones de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI). En ese sentido, recomienda reformular la propuesta para que sea el Director General de la DICAPI, y no el Comandante General de la Marina de Guerra, quien integre el CONASEC, por su mayor especialización. También se sugiere modificar la disposición sobre reglamentación para alinearla con la normativa vigente.

5. El **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,** concluye que la propuesta legislativa **no es viable**, toda vez que el Estado ha diseñado sistemas diferenciados para la seguridad nacional (SIDENA) y la seguridad ciudadana (SINASEC), asignando funciones específicas a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, respectivamente. En ese sentido, señala que la propuesta desnaturaliza la separación funcional entre la Policía

Nacional y las Fuerzas Armadas, pues según la normativa vigente, la Policía tiene competencia exclusiva en el orden interno, mientras que la Marina de Guerra interviene en la seguridad ciudadana de manera excepcional y subsidiaria, cuando la capacidad operativa de la Policía es superada y siempre bajo solicitud formal del Ministerio del Interior.

6. La **Asociación de Seguridad Privada del Perú - ASEPRI**, sostiene que no tiene competencia para opinar sobre la iniciativa legislativa en mención; no obstante, considera que se debe modificar el artículo 7 de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, toda vez que el Presidente de la Sociedad Nacional de Seguridad, actualmente miembro de la CONASEC, no registra actividad ni vida institucional, encontrándose en SUNAT con suspensión temporal desde el 2016; por lo tanto, propone que se le sustituya por un representante de la Asociación de Seguridad privada en el Perú, pues son un servicio esencial.

**b. Proyecto de Ley 54/2021-CR**

1. La **Presidencia del Consejo de Ministros**, a través de su Oficina General de Asesoría Jurídica, sostiene que el proyecto de ley contiene materias que no se encuentran relacionadas con las funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, sino dentro del ámbito de competencias del Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa.

2. El **Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos** sostiene que la iniciativa legislativa **es viable con observaciones**. Al respecto, señala que la normativa vigente reconoce a las Juntas Vecinales como organizaciones sociales de base, promovidas por la Policía Nacional, con funciones preventivas y de apoyo en seguridad ciudadana dentro del SINASEC. Su participación se circunscribe a la competencia de los comités de seguridad ciudadana encargados de atender territorios más focalizados (comités de carácter regional, provincial y distrital); no obstante, su inclusión en el CONASEC significaría su reconocimiento en la formulación de políticas de seguridad a nivel nacional. Sin perjuicio de ello, advierte que la propuesta emplea el término "representante nacional" en lugar de "Coordinador Nacional", lo que no se ajusta a la regulación vigente establecida en el "Manual de Organización y Funcionamiento de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana".

3. El **Ministerio del Interior** concluye que la iniciativa legislativa, resulta **viable**, toda vez que la inclusión de las Juntas Vecinales en el CONASEC fortalecería la participación ciudadana y la articulación con las políticas de seguridad. Menciona que La Dirección General de Seguridad Ciudadana respalda la propuesta, argumentando que fortalecería la participación ciudadana. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú enfatiza que la seguridad es una función exclusiva de la institución, limitando el rol de las juntas vecinales a un apoyo dentro del marco normativo vigente.

**c. Proyecto de Ley 1000/2021-CR**

1. El **Ministerio Público** sostiene que la iniciativa legislativa **es viable**, por cuanto no contraviene mandato constitucional alguno, ni vulnera la autonomía municipal, la información del mapa del delito no es sensible que deba ser protegida o mantenida con reserva, por el contrario se trata de una información que surge como una herramienta útil para la lucha contra la delincuencia, y se sustenta en lineamientos teóricos y metodológicos, con la finalidad de proporcionar a los operadores de justicia, investigadores y sociedad civil , insumos para el diseño, implementación y evaluación de políticas en materia de prevención, persecución del delito, protección de víctimas y rehabilitación. Además, servirá como un medio o recurso para que el ciudadano común o la misma sociedad civil organizada [como las juntas vecinales u otras organizaciones sociales] puedan acceder a su contenido y adoptar medidas propias en su protección. Finalmente, recomienda estandarizar la gestión de la información con un enfoque criminológico para su correcta interpretación y aplicación.

2. La **Municipalidad Metropolitana de Lima**, a través de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, concluye que la iniciativa legislativa es **viable**, pues se encuentra en armonía con la legislación vigente, conduciendo su emisión al trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y las Municipalidades para la elaboración de tan importante herramienta a favor de la seguridad ciudadana; asimismo, sostiene que la propuesta incorpora el uso de herramientas tecnológicas de uso masivo, situación que permitirá a las municipalidades acercar tan importante información al ciudadano, dotándolo de un instrumento informativo que le permitirá conocer las zonas con mayor incidencia delictiva en la jurisdicción por donde se desplazará. No obstante, formula observaciones, precisando que el numeral 67.1, del artículo 67 del Reglamento de la Ley N° 27933, establece, que la Policía Nacional del Perú con el apoyo técnico de los órganos competentes del Ministerio del Interior, es la responsable del diseño, implementación y gestión del Mapa del Delito georreferenciado, en las jurisdicciones de las municipalidades provinciales y distritales. Para tal efecto, la norma precisa que, las municipalidades brindarán información sobre las capacidades operativas institucionales en materia de seguridad ciudadana, así como información socioeconómica de su jurisdicción.

3. La **Presidencia del Consejo de Ministros**, sostiene que el proyecto de ley contiene materias que no se encuentran relacionadas con las funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, sino dentro del ámbito de competencias del Ministerio del Interior.

4. El **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**, a través de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, opina que la iniciativa legislativa es **viable** con observaciones. Sobre el particular señala que, el mapa del delito es una herramienta de gestión para la toma de decisiones (tácticas y estratégicas), así como un producto, que puede ser difundido en

beneficio de la seguridad de los ciudadanos; sin embargo, señala que, la difusión y uso del mapa del delito, tiene relación directa con los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2021-2023; por lo que, para su difusión debe tomarse en consideración cuál es su utilidad, por ejemplo, en la recuperación de lugares públicos seguros y como se vincula con la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro.

Finalmente, señala que, debe tenerse en cuenta que el móvil que debe sustentar la difusión de las áreas de mayor incidencia a través de los medios de comunicación masivos podría generar efectos de segregación residencial. Entonces, si lo que se busca es conducir intervenciones hacia dichas zonas focalizadas, se sugiere que la difusión se efectúe por las entidades locales que prestan servicios de prevención social, justicia y/o de reinserción con mayor énfasis.

5. La **Defensoría del Pueblo**, emite opinión **desfavorable**, señalando que la criminalidad es dinámica y no siempre responde a patrones fijos, por lo que la difusión del mapa del delito podría generar interpretaciones erróneas o estigmatizar determinadas zonas. Además, cuestiona la afirmación de que la medida reduciría costos operativos en seguridad municipal y policial, instando a que se consulte a actores clave como la Asociación de Municipalidades del Perú y la Policía Nacional. Finalmente, advierte sobre las limitaciones tecnológicas y económicas de muchas municipalidades (primordialmente en zonas alto andinas y rurales) para cumplir con el mandato de difusión digital, proponiendo en su lugar el uso de plataformas ya existentes, como el portal de transparencia del Estado. En conclusión, aunque la propuesta busca mejorar la seguridad ciudadana, requiere mayor precisión en su formulación y sustento técnico para evitar efectos contraproducentes.

6. La **Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales** está **de acuerdo** con la iniciativa legislativa, por cuanto considera que la ciudadanía debe contar con mayores herramientas que le permita conocer y evadir los puntos calientes o de mayor incidencia delictiva y así salvaguardar su vida, su integridad, la de su familia y su propiedad. Sin embargo, sostiene que la proposición requiere mayor precisión normativa y sustento técnico para garantizar su efectividad sin generar estigmatización de zonas específicas. Agrega que, a la fecha, cuentan con una base de datos elaborada por el INEI: https://datacrim.inei.gob.pe/ciudadano.

**d. Proyecto de Ley 1059/2021-CR**

1. El **Ministerio del Interior** concluye que la iniciativa legislativa es **viable en parte**. Es viable en el extremo de las Juntas Vecinales e inviable en cuanto a las Rondas Campesinas. Respecto a las Juntas Vecinales señala que estas son promovidas y organizadas por la Policía Nacional del Perú y que su estructura incluye la figura de un coordinador nacional elegido entre los coordinadores regionales, conforme a lo establecido en el Manual de

Juntas Vecinales aprobado por Resolución Ministerial N° 0880-2015-IN. Esta estructura organizativa permitiría la representación formal de la ciudadanía organizada en el CONASEC. No obstante, se advierte que estas juntas son promovidas por la Policía Nacional, que ya tiene representación en el Consejo a través del Comandante General de la PNP, lo que podría generar redundancia en la toma de decisiones.

Por otro lado, en cuanto a las rondas campesinas, la Ley N° 27908 reconoce su personalidad jurídica y su función en la seguridad comunal, pero no establece la figura de un representante nacional. Tampoco se contempla en su reglamento ni en las directivas registrales. Para hacer viable su incorporación al CONASEC, sería necesario modificar tanto el reglamento como la Directiva N° 003-2011-SUNARP-SA.

2. El **Poder Judicial,** sostiene que la propuesta legislativa es **inviable**, pues, actualmente las rondas campesinas y juntas vecinales ya forman parte del SINASEC a través de los comités de seguridad ciudadana a nivel distrital, provincial y regional, donde pueden contribuir activamente en la formulación de estrategias de seguridad, tal como lo establecen los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 27933. Señala también que la propuesta enfrenta dificultades jurídicas y operativas, por cuanto no existe una organización representativa única de las rondas campesinas a nivel nacional, lo que haría inviable su incorporación al CONASEC bajo el modelo actual. Además, indica que el CONASEC es un órgano de nivel estratégico y normativo, mientras que las rondas y juntas vecinales actúan en un ámbito operativo y territorial, por lo que su participación en este órgano no encajaría en la estructura funcional del sistema.

   Indica que, al igual que las rondas campesinas, las juntas vecinales de seguridad ciudadana como organizaciones sociales de base, promovidas por la Policía Nacional del Perú, están representadas ya en los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana, pero no en el ámbito nacional. Su naturaleza es coadyuvante y de apoyo; de allí que su trabajo es voluntario, no remunerado y participativo; por ello, su participación en el marco del SINASEC, se justifica únicamente a nivel descentralizado en los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana.

3. La **Presidencia del Consejo de Ministros** sostiene que el proyecto de ley contiene materias que no se encuentran relacionadas con las funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, sino dentro del ámbito de competencias del Ministerio del Interior.

4. La **Municipalidad Metropolitana de Lima** sostiene que la iniciativa legislativa es **inviable**, debido a que la participación de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en el CONASEC ya está garantizada a través de la representación de la Policía Nacional del Perú, institución que las promueve y capacita en coordinación con los gobiernos regionales

y locales. Respecto a las rondas campesinas, señala que su función principal es apoyar la solución de conflictos dentro de sus comunidades, bajo sus costumbres y normativas específicas (Ley N° 27908 y su Reglamento). Dado que su accionar se centra en la justicia comunal y la conciliación extrajudicial, no se alinea con la finalidad del CONASEC, cuyo propósito es la formulación e implementación de políticas de seguridad ciudadana a nivel nacional. En consecuencia, concluye que la inclusión de representantes de las Juntas Vecinales y las Rondas Campesinas en el CONASEC no es jurídicamente viable, ya que las estructuras existentes dentro del SINASEC ya contemplan su participación indirecta o no son compatibles con su ámbito de acción.

5. La **Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales** está **de acuerdo** con la incorporación de las juntas vecinales y rondas campesinas en el CONASEC pues considera se debe reconocer los esfuerzos de la ciudadanía organizada, siempre que ello no implique vulneración a la autonomía política de los Gobiernos Regionales.

6. **El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos** manifiesta que la iniciativa legislativa es **viable con observaciones**, debido a que, si bien las Juntas Vecinales cuentan con una representación nacional formalizada, lo que justifica su inclusión en el CONASEC, las Rondas Campesinas carecen de una estructura nacional reconocida, lo que hace inviable su incorporación inmediata. En ese sentido, sugiere que esta inclusión dependa de la aprobación del Proyecto de Ley N° 2905/2022-PE, que propone la creación de un registro formal para organizaciones indígenas y rondas campesinas.

**e. Proyecto de Ley 1464/2021-CR**

1. La **Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales** sostiene estar **de acuerdo** con la iniciativa legislativa, dado la importancia de reconocer los esfuerzos de la ciudadanía organizada, debiéndose determinar como miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana a las rondas y juntas vecinales, y siempre que ello no implique vulneración a la autonomía política de los Gobiernos Regionales.

2. El **Ministerio de Cultura**, tomando en consideración los comentarios realizados por la Dirección General de Ciudadanía Intercultural y la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas, sostiene que el proyecto de ley es **viable**; no obstante, formula **observaciones** y sugiere los siguientes ajustes:

   - **Modificación del título**: Recomienda eliminar el término "rondas nativas" porque no está reconocido en el marco normativo vigente, reemplazándolo por la denominación "rondas campesinas y comunales".

- **Inclusión de pueblos indígenas u originarios amazónicos**: Plantea la necesidad de asegurar su representación en el Consejo Nacional y comités de seguridad ciudadana en todos los niveles (regional, provincial y distrital).

- **Enfoque intercultural en seguridad ciudadana:** Recomienda que la definición de seguridad ciudadana reconozca la diversidad cultural y lingüística del país, incorporando el término "culturalmente diverso".

- **Reconocimiento del pueblo afroperuano:** Sugiere emplear esta denominación de acuerdo con la Política Nacional de Cultura al 2030 y la legislación vigente, considerando la vulnerabilidad de este grupo.

- **Consulta previa a pueblos indígenas:** Según la Ley N° 29785 y el Convenio 169 de la OIT, señala que el Congreso debe evaluar si la propuesta afecta derechos colectivos indígenas, lo que implicaría realizar una consulta previa antes de su aprobación.

- **Enfoque de seguridad ciudadana culturalmente pertinente:** Se recomienda modificar el artículo 3 de la Ley N° 27933 para garantizar una política de seguridad ciudadana adaptada a la realidad de los pueblos indígenas, comunidades y rondas campesinas.

3. El **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**, a través de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, sostiene que el proyecto de ley es **viable con observaciones**, puesto que no colisiona con el objetivo principal de la ley 27933 y porque es necesario que los pueblos originarios, comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas participen en todos los niveles del SINASEC a fin de lograr que las políticas sean eficientes y eficaces para alcanzar la paz social y el respeto de los derechos de todas las personas y pueblos; sin embargo, advierte que el enfoque intercultural ya está presente en la política multisectorial de seguridad. Además, señala que la incorporación de representantes de las rondas campesinas en el CONASEC enfrenta dificultades debido a la falta de un registro formal de estas asociaciones y a la ausencia de un procedimiento claro de elección. En ese sentido, recomienda ampliar la exposición de motivos y considerar el Proyecto de Ley 2905/2022-PE, que propone un registro oficial para pueblos indígenas y rondas campesinas.

**f. Proyecto de Ley 1598/2021-CR**

1. La **Presidencia del Consejo de Ministros** sostiene que el proyecto de ley contiene materias que no se encuentran relacionadas con las funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, sino dentro del ámbito de competencias del Ministerio de Cultura y el Ministerio del Interior; por lo tanto, corresponde a este sector emitir opinión al respecto.

2. El **Ministerio de Cultura**, a través de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural opina que, actualmente existe un marco normativo que reconoce y regula las rondas comunales como órganos encargados de la seguridad y la paz al interior de las comunidades nativas, por lo que considera que la propuesta debe ajustarse a este marco legal y fortalecer las estructuras de seguridad existentes. En atención a ello y al derecho de autonomía que ostentan los pueblos indígenas, es necesario que la presente propuesta normativa reconozca y fortalezca estos modos de organización vigentes al interior de las comunidades nativas, que tendrían una finalidad similar a lo planteado para el órgano de "Seguridad Indígena". Asimismo, recomienda lo siguiente:

   - Evaluar si la propuesta requiere precisiones normativas.
   - Incorporar la representación indígena en el CONASEC para garantizar la interculturalidad en políticas de seguridad; en ese sentido, sugiere el siguiente tenor para los artículos 14, 15 y 16 de la Ley N° 27933: "Un representante de la organización regional que agrupa al mayor número de las comunidades nativas u otra forma de organización representativa de los pueblos indígenas u originarios amazónicos, de la jurisdicción donde las hubiera".
   - Asegurar que el proyecto respete el artículo 149 de la Constitución sobre jurisdicción especial indígena.
   - Determinar si es necesaria una consulta previa con pueblos indígenas, conforme al Convenio 169 de la OIT y la Ley N° 29785.
   - Considerar la falta de participación indígena en la formulación del proyecto y la necesidad de incluir sus perspectivas.

3. La **Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales** indica que está **de acuerdo** con la iniciativa legislativa, puesto que la inseguridad y la ausencia del Estado han llevado históricamente a las comunidades a organizarse en rondas campesinas y comités de autodefensa para protegerse de amenazas como el abigeato y el terrorismo; en este sentido, considera que esta propuesta responde a una necesidad real y que deben ser reconocidas formalmente en la estructura de seguridad del país. No obstante, formula una **observación** que consiste en que deben coordinar con la Policía Nacional y ser registrados por los gobiernos locales con un carácter informativo.

4. El **Ministerio del Interior** sostiene que la propuesta normativa debe ser **reevaluada**, toda vez que, según la opinión de la Policía Nacional del Perú, la iniciativa es inaplicable en razón de no ser concordante con el artículo 166 de la Constitución Política del Perú; y que solo podría ser viable la incorporación de un representante de las comunidades nativas como integrante del Comité Distrital y Comité Provincial en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; más no del Comité Regional.

   Asimismo, señala que la Dirección General de Orden Interno opina que, si consideramos que un representante de las comunidades nativas forme

parte de los comités de seguridad, tendríamos duplicidad de miembros en representación de las comunidades nativas, porque ya la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana considera a un miembro de las rondas comunales - que son organizaciones sociales creadas e integradas por miembros de las comunidades nativas - del distrito y provincia, en los respectivos comités distritales y provinciales de seguridad ciudadana.

Por otra parte, indica que la opinión de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, es que la iniciativa para incorporar a un representante de la organización que agrupa al mayor número de las comunidades nativas de la jurisdicción donde las hubiera, como integrantes del CORESEC, COPROSEC y CODISEC, en razón a que ya se encontrarían habilitados por la normativa vigente antes señaladas.

5. El **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos** emite opinión respecto al contenido de otro proyecto de Ley 1000/2021-CR, referido a la difusión del mapa del delito.

6. El **Ministerio de Defensa**, no emite opinión por cuanto no se encuentra dentro de sus competencias.

**g. Proyecto de Ley 2041/2021-CR**

1. El **Ministerio del Interior**, emite opinión del texto sustitutorio del dictamen aprobado sobre el mapa del delito, considerándolo **viable** por cuanto considera que contribuirá a la seguridad ciudadana mediante una mejor difusión de información sobre la criminalidad, para tal efecto, cita las opiniones técnicas del sector interior que se detallan a continuación:

   - *Dirección General de Seguridad Ciudadana*: Destaca la necesidad de reforzar la acción coordinada del Estado en seguridad ciudadana, en línea con la Ley N° 27933 y su reglamento. Se enfatiza la articulación de los tres niveles de gobierno y la participación ciudadana como elementos clave en la prevención del delito.
   - *Policía Nacional*: A través del Estado Mayor General, la Policía respalda la propuesta al considerar que fortalecerá el SINASEC. La difusión del mapa del delito permitirá a la ciudadanía adoptar medidas preventivas y mejorar la vigilancia mediante la participación de los gobiernos locales.
   - *Oficina General de Asesoría Jurídica*: Analiza la compatibilidad del proyecto con el marco normativo, incluyendo la Constitución, las leyes orgánicas de municipalidades y gobiernos regionales, y el Decreto Legislativo 1316. Se concluye que la propuesta se alinea con la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030, la cual busca reducir la victimización y fortalecer la seguridad pública.

2. La **Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales** sostiene que está **de acuerdo** con el proyecto de ley, considerando que las rondas y juntas

vecinales tienen una participación activa en la seguridad ciudadana y su inclusión permitirá una mejor coordinación con el Estado, siempre que ello no implique vulneración a la autonomía política de los Gobiernos Regionales.

3. La **Presidencia del Consejo de Ministros** sostiene que el proyecto de ley contiene materias que no se encuentran relacionadas con las funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, sino dentro del ámbito de competencias del Ministerio del Interior; por lo tanto, corresponde a este sector emitir opinión al respecto.

4. El **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**, por intermedio de su Dirección General de Asuntos Criminológicos, señala que la iniciativa legislativa es **viable**, puesto que no colisiona con el objetivo principal de la ley del SINASEC; no obstante, formula las siguientes **observaciones**:

   - Sobre el aumento de sesiones descentralizadas del CONASEC de dos a tres por año, señala que, aunque la medida no altera el propósito de la Ley 27933, no se ha presentado un análisis técnico ni presupuestal sobre su impacto, dado que el traslado de los 22 miembros del CONASEC, más los dos propuestos y sus equipos técnicos, generaría costos adicionales.

   - Respecto a la incorporación de representantes de organizaciones ciudadanas, indica que, si bien la presencia de las Juntas Vecinales es razonable por su reconocimiento legal y operatividad en seguridad ciudadana, la incorporación de las Rondas Campesinas presenta problemas normativos. La Ley 27908 no contempla una estructura nacional de representación, lo que implica la necesidad de modificar su marco legal para evitar problemas en su designación y legitimidad.

5. El **Ministerio de Cultura** sostiene que la iniciativa legislativa es **viable**; no obstante, formula **observaciones** de acuerdo a las opiniones de dos direcciones de dicho sector. Así, se indica que la Dirección General de Ciudadanía Intercultural destaca que las rondas campesinas y las organizaciones indígenas ya poseen atribuciones en seguridad dentro de su jurisdicción y sugiere incluir también a las organizaciones indígenas amazónicas. En tanto, la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas refuerza esta postura y advierte que la propuesta podría afectar derechos colectivos, lo que implicaría la obligación de un proceso de consulta previa antes de su aprobación.

**h. Proyecto de Ley 2488/2021-CR**

1. La **Presidencia del Consejo de Ministros** sostiene que el proyecto de ley contiene materias que no se encuentran relacionadas con las funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, sino dentro del ámbito de competencias del Ministerio del Interior y Ministerio de Economía y

Finanzas; por lo tanto, corresponde a dichos sectores emitir opinión al respecto.

2. La **Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales** señala estar **de acuerdo** con la iniciativa legislativa; no obstante, formula **observaciones**, en base a que, si bien reconoce el déficit de vehículos operativos de la Policía Nacional y la necesidad de mejorar su infraestructura para fortalecer la seguridad ciudadana, advierte que la iniciativa es declarativa y no genera medidas concretas para resolver el problema. Además, menciona la dificultad de delimitar el concepto de "interés general" en este tipo de normas y se enfatiza que cualquier acción real requeriría financiamiento y planificación estatal.

3. El **Ministerio del Interior** considera que la iniciativa **es viable con observaciones** debido a deficiencias en su alcance y en la asignación de responsabilidades. Según el Departamento de Administración del Parque Automotor de la PNP, la institución enfrenta un grave déficit de vehículos (40% de los vehículos destinados al patrullaje y el 48% del total del parque automotor están inoperativos), lo que impacta directamente en la capacidad operativa para la seguridad ciudadana. En ese sentido, considera que la proposición normativa tendría un enfoque limitado, recomendando ampliar su alcance para abordar otras brechas estructurales de la PNP, en concordancia con el Plan Estratégico de Capacidades de la Policía Nacional del Perú al 2030 (Plan MS30), el cual establece que, además de vehículos e infraestructura, se deben fortalecer recursos humanos, equipamiento, tecnología y sistemas de comunicación. Asimismo, se observa la modificación del artículo 3, por cuanto el CONASEC tiene por función la formulación de políticas más no la gestión operativa, por lo que non podría asumir el seguimiento y coordinación del plan, sugiriendo que la Policía sea la responsable de la implementación de mejoras en el parque automotor e infraestructura.

4. La **Fiscalía de la Nación** considera que la propuesta legislativa es **viable** por cuanto técnicamente se encuentra acorde con la política criminal de lucha contra la inseguridad ciudadana, que es coherente con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023.

**i. Proyecto de Ley 3349/2022-CR**

1. La **Superintendencia Nacional de Bienes Estatales** informa que, dado su carácter de Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha remitido a dicho sector la opinión técnico-legal.

2. El **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos** sostiene que la iniciativa legislativa **no es viable** debido a inconsistencias en su justificación y en su planteamiento normativo. Señala que la propuesta se sustenta en el incremento de delitos entre 2016 y 2022, según datos del INEI, destacando

aumentos en delitos contra la vida, el patrimonio y la seguridad pública; sin embargo, la disminución delictiva en 2019-2020 se debió a restricciones de movilidad por la pandemia, y el posterior aumento en 2021 no constituye un cambio excepcional que justifique la emergencia. También indica que desde l punto de vista normativo, la propuesta presenta vacíos regulatorios en cuanto al papel de los Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, el Serenazgo, y la participación de entidades clave como el Ministerio Público y el Poder Judicial; además, no autoriza a municipalidades y otros niveles de gobierno a invertir en seguridad ciudadana, lo que limita la efectividad de la norma en caso de aprobarse. Concluye que el proyecto no justifica adecuadamente la declaratoria de emergencia del SINASEC, ya que los problemas identificados pueden resolverse con una mejor gestión de recursos. Además, la propuesta implica costos adicionales no previstos y no aborda integralmente la problemática de seguridad ciudadana en los diferentes niveles de gobierno.

3. La **Fiscalía de la Nación** manifiesta que la iniciativa es compatible con el orden constitucional y guarda consonancia con las políticas públicas actuales y normativa vigente y el fortalecimiento del orden interno. Sin embargo, al ser declarativa no vincula al poder Ejecutivo en el otorgamiento de un presupuesto.

4. La **Presidencia del Consejo de Ministros** sostiene que el proyecto de ley **no es viable** debido a que vulnera principios constitucionales y normativos Argumenta que vulnera el principio de separación de poderes (art. 43 de la Constitución) y el principio de competencia (Ley N° 29158), pues solo el Poder Ejecutivo puede modificar sistemas funcionales como el SINASEC y crear comisiones dentro de su ámbito para la reforma del sistema. Asimismo, señala que el proyecto involucra funciones del Ministerio del Interior, Vivienda y Economía, por lo que la PCM ha pedido su opinión.

5. El **Ministerio de Economía y Finanzas** a través de la Dirección General de Presupuesto Público **observa** el proyecto por vulnerar normas de equilibrio financiera, como el artículo 78 de la Constitución y el Decreto Legislativo N° 1440, al no prever la sostenibilidad de los gastos. También se indica que contraviene el artículo 79 de la Constitución, que prohíbe que el Congreso genere o incremente gastos públicos.

**j. Proyecto de Ley 3552/2022-CR**

1. La **Presidencia del Consejo de Ministros** sostiene que el proyecto de ley contiene materias que no se encuentran relacionadas con sus funciones, sino dentro del ámbito de competencias del Ministerio del Interior; por lo tanto, corresponde a dicho sector emitir opinión al respecto.

2. El **Ministerio de Economía y Finanzas** no emite opinión por no ser de su competencia

**k. Proyecto de Ley 4751/2022-CR**

1. La **Presidencia del Consejo de Ministros** sostiene que el proyecto de ley es **inviable** debido a problemas de competencia, legalidad y falta de sustento técnico. En primer lugar, señala que la modificación de sistemas funcionales es atribución exclusiva del Poder Ejecutivo, conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y los Lineamientos de Organización del Estado; además, el proyecto no cuenta con la opinión del Ministerio del Interior, entidad rectora en seguridad ciudadana. Asimismo, indica que la iniciativa vulnera el principio de separación de poderes, ya que otorgaría al Congreso una participación dentro de un órgano ejecutivo, lo que implica una intromisión en sus competencias. Además, carece de justificación técnica y legal, al no presentar un análisis de impacto normativo ni coordinar con las entidades competentes.

2. El **Ministerio del interior** considera que la iniciativa legislativa **no es viable** debido a conflictos con el marco normativo vigente, la separación de poderes y la función fiscalizadora del Congreso. Las principales razones expuestas en el informe, que recoge las opiniones del Ministerio del Interior, la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú y la Oficina General de Asesoría Jurídica incluyen:
   - *Incompatibilidad con la Ley N° 27933:* El CONASEC es un órgano ejecutivo encargado de la formulación y evaluación de políticas de seguridad ciudadana. Sus miembros deben ser titulares de entidades, lo que no se cumple en el caso del presidente de una comisión parlamentaria.
   - *Riesgo de conflicto de interés:* La Comisión de Defensa Nacional ejerce control político y fiscalización sobre el CONASEC. Permitir que su presidente sea miembro de este órgano generaría un problema de imparcialidad, pues actuaría simultáneamente como fiscalizador y parte fiscalizada.
   - *Vulneración de la separación de poderes:* La propuesta podría interpretarse como una intromisión del Congreso en un órgano del Poder Ejecutivo, afectando la independencia de funciones.
   - *Mecanismos alternativos ya existentes:* La normativa vigente permite que el CONASEC invite a representantes del Congreso cuando se traten temas de interés, sin necesidad de otorgarles un puesto permanente.

**l. Proyecto de Ley 6420/2023-CR**

1. El **Ministerio de Economía y Finanzas** señala que no resulta competente para emitir opinión.

2. El **Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo** concluye que no es competente para emitir opinión, pues la competencia recae en la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Interior, por ser los entes responsables del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

3. La **Presidencia del Consejo de Ministros** considera **inviable** la proposición normativa por presunta vulneración de los principios constitucionales de separación de poderes y competencia, ya que el Congreso estaría interviniendo en la organización de un sistema funcional como el de seguridad ciudadana, cuya rectoría corresponde al Poder Ejecutivo; añade al respecto que, según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (artículos 43 y 45), los sistemas funcionales solo pueden ser creados o modificados por iniciativa del Ejecutivo, con la opinión favorable de la PCM; sin embargo, en este caso no existe coordinación con el Ministerio del Interior, lo que supone una transgresión del principio de competencia.

   Por otro lado, advierte la falta de justificación adecuada para la inclusión de un congresista en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, menciona que no se ha realizado un análisis de impacto cuantitativo o cualitativo, ni se ha demostrado cómo esta medida contribuiría a la mejora de la seguridad ciudadana; además, mediante Decreto Legislativo N° 1618 (diciembre de 2023), ya se realizaron modificaciones en los artículos 5 y 7 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, incluyendo nuevos representantes como la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas.

4. El **Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento** sostiene que la iniciativa legislativa debe ser **reevaluado** en base a las siguientes observaciones:
   - *Desactualización normativa:* La propuesta no considera la versión vigente de la Ley N° 27933, actualizada por el Decreto Legislativo N° 1618.
   - *Falta de sustento en la Exposición de Motivos:* No se justifica adecuadamente los cambios propuestos, como el incremento en la frecuencia de sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y la inclusión de un congresista en dicho consejo.
   - *Plazo inadecuado para la adecuación normativa*: el plazo de 15 días para la adecuación reglamentaria es insuficiente.

5. El **Ministerio del Interior** sostiene que el proyecto de ley es **inviable** principalmente porque contravendría los artículos 92 y 102 de la Constitución que establecen la dedicación exclusiva de los congresistas y la incompatibilidad con cualquier otra función pública permanente que no sea de legislar, representar y fiscalizar, mas no de integrar órganos ejecutivos. Informa al respecto que los congresistas pueden ser invitados a las sesiones del CONASEC, pero no pueden integrarla permanentemente pues podría generar interferencia política en su funcionamiento. Por otro lado, señala que el Poder Legislativo no tiene competencia para determinar la periodicidad de las reuniones del CONASEC, pues dicha facultad es exclusiva del Poder Ejecutivo.

6. El **Ministerio de Defensa** indica que la iniciativa legislativa no se encuentra dentro del ámbito de su competencia por lo que no le corresponde emitir opinión.

7. El **Ministerio de Cultura** formula **observaciones** al proyecto de ley. Primero, señala que la propuesta se basa en los artículos 5 y 7 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en su versión anterior a las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N° 1618 (21/12/2023), por lo que recomienda reevaluar la fórmula legal para adecuarla a la normativa vigente. Segundo, sobre la propuesta de aumento de la frecuencia de reuniones del CONSEC, sostiene que la exposición de motivos no presenta evidencia sobre cómo esta medida contribuiría a mejorar la seguridad ciudadana. Finalmente, respecto a la inclusión de un congresista en el CONASEC, el informe recomienda evaluar la propuesta en relación con el artículo 92 de la Constitución, que establece las funciones de los congresistas. Además, recuerda que el presidente del CONASEC ya tiene la facultad de invitar a autoridades y representantes del sector público y privado a participar en las sesiones.

8. **El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos** sostiene que la propuesta es **viable con observaciones**. Señala que la propuesta está basada en una versión desactualizada de la ley, ya que el Decreto Legislativo N° 1618 (21/12/2023) modificó los mismos artículos que el proyecto busca cambiar; por lo tanto, recomienda ajustar la iniciativa a la legislación vigente. En cuanto a la justificación del incremento de reuniones advierte que la exposición de motivos no explica cómo el aumento de reuniones impactará en la mejora de la seguridad ciudadana. Y, respecto a la inclusión de un congresista en el CONASEC, no se ofrece una justificación técnica ni se identifica un problema que requiera su incorporación. Además, el informe recuerda que el presidente del consejo ya tiene facultades para invitar a diversas autoridades.

**m. Proyecto de Ley 8227/2023-CR**

1. La **Asociación de Municipalidades del Perú** sostiene que su opinión es **favorable,** estacando que el proyecto promueve una mayor coordinación entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y la ciudadanía para fortalecer la lucha contra la delincuencia y mejorar el uso del espacio público.

2. El **Ministerio de Economía y Finanzas** señala que la proposición normativa no es viable, por cuanto no considera la redacción vigente de la norma no resulta competente para emitir opinión sobre el proyecto de ley.

3. El **Ministerio de Educación** considera que la iniciativa legislativa es **no viable** por las siguientes razones:
   - No se considera la redacción vigente de la Ley N° 27933, modificada por el Decreto Legislativo N° 1618.

- No se justifica técnicamente que aumentar las reuniones del CONASEC tenga un impacto directo en la reducción de la inseguridad ciudadana.
- La propuesta de rendición de cuentas al Congreso ya está contemplada en la normativa vigente (literal d) del artículo 9 del Decreto Legislativo 1618), por lo que no se requiere una regulación adicional.

4. El **Ministerio del Interior** sostiene que emite opinión que es **viable con observaciones** por las siguientes razones:
   - Actualmente no existe un "Plan Nacional de Seguridad Ciudadana" vigente, por lo que se debería tomar en cuenta la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana.
   - el plazo propuesto para la presentación del informe anual no se alinea con la metodología del SINAPLAN y CEPLAN.
   - La ley vigente ya permite convocar sesiones adicionales (extraordinarias) del CONASEC cuando sea necesario. No obstante, se considera válida la propuesta de priorizar sesiones descentralizadas en zonas con alta criminalidad.

5. El **Ministerio Público** se muestra **a favor** de la iniciativa legislativa pues según señala pretende mejorar la gestión del CONASEC aumentando la periodicidad de sus reuniones ordinarias a seis al año, lo que facilitaría la evaluación continua de las políticas de seguridad y permitiría ajustar estrategias. Además, valora positivamente la inclusión de reuniones descentralizadas en zonas con alta criminalidad, pues permitiría conocer la problemática local y mejorar la planificación y ejecución de estrategias de seguridad. En cuanto al informe anual sobre el cumplimiento de las políticas de seguridad, cuestiona su presentación en abril, ya que los resultados de dichas políticas se evalúan mejor al finalizar el año. Se propone que, en caso de mantenerse la fecha, el informe refleje el año anterior. Finalmente, recomienda fortalecer la coordinación interinstitucional incorporando al Presidente del Congreso en el CONASEC, lo que facilitaría la armonización de políticas entre el Legislativo y el Ejecutivo, asegurando un respaldo normativo efectivo y mayor compromiso en la implementación de estrategias de seguridad.

6. La **Presidencia del Consejo de Ministros** sostiene que el proyecto de ley carece de una justificación adecuada sobre la necesidad de modificar la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Argumenta que el literal j) propuesto es redundante, ya que el literal d) del mismo artículo 9 ya prevé un mecanismo de rendición de cuentas ante el Congreso.

7. El **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos** concluye que la propuesta contenida en el proyecto de ley es **viable con observaciones** debido a que el incremento de sesiones ordinarias fortalecería la articulación en la formulación de políticas de seguridad, pero considera que la precisión sobre sesiones descentralizadas es innecesaria, dado que ya es una facultad del CONASEC el decidir donde realizarlas. Por otro lado, señala que, si bien es viable que el CONASEC informe ante el Pleno del

Congreso, la propuesta debería realizarse mediante la modificación del literal d) del artículo 9 en vez de agregar un nuevo literal j).

**n. Proyecto de Ley 8418/2023-CR**

1. **Ministerio de Economía y Finanzas** manifiesta que no resulta competente para emitir opinión.

2. La **Asociación de Municipalidades del Perú** emite opinión **favorable**, destacando que el proyecto de ley permitiría una gestión más eficiente y frecuente de la seguridad. Subraya también que la grave crisis de inseguridad en el país y la necesidad de fortalecer la coordinación gubernamental para enfrentarla.

3. El **Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social** considera que la proposición normativa de sesiones virtuales del CONASEC **no es viable**, toda vez que, a que la ley vigente permite convocar sesiones extraordinarias adicionales a las cuatro ordinarias anuales, según lo determine el presidente del CONASEC. Asimismo, se resalta que la formulación y supervisión de políticas de seguridad ciudadana corresponden al Ministerio del Interior. Finalmente, se enfatiza que la competencia del MIDIS no abarca la seguridad ciudadana, por lo que su intervención en este tema es limitada.

4. El **Ministerio de Salud** sostiene que la iniciativa legislativa de incrementar la frecuencia de las reuniones del CONASEC es **viable**; sin embargo, sugiere que las sesiones sean trimestrales en lugar de mensuales, con el fin de permitir una evaluación más detallada de los avances y facilitar la participación de los representantes titulares en las discusiones estratégicas.

5. La **Presidencia del Consejo de Ministros** sostiene que la proposición normativa es **viable**, pues se destaca su compatibilidad con la Ley de Gobierno Digital y su reglamento.

6. El **Ministerio del Interior** indica que el proyecto de ley **no es viable**, por cuanto la propuesta de realización de sesiones virtuales mensuales no se condice con el hecho que el CONASEC, como máxima instancia del SINASEC trata asuntos de relevancia nacional que requieren la presencia de sus integrantes, incluidos ministros de Estado, el Presidente del Consejo de Ministros y otras autoridades de alto nivel. Asimismo, señala que la propuesta sobre la frecuencia de reuniones no tiene respaldo en datos que evidencien que dicha frecuencia afecta la operatividad del CONASEC, la toma de decisiones no depende del número de sesiones, sino de la calidad de los acuerdos.

7. El **Instituto Nacional Penitenciario** opina **favorablemente** sobre las sesiones virtuales del CONASEC, pues según indica, ello asegurará la

participación de todos los integrantes, en virtud a que por razones propias de sus cargos muchas veces no se encuentran en la ciudad de Lima; sumándose a ello, que la virtualidad ha sido implementada para una serie de actividades.

8. El **Ministerio de Comercio Exterior y Turismo** sostiene que la propuesta de que el CONASEC realice sesiones virtuales mensuales, complementando las reuniones ordinarias presenciales es jurídicamente **viable**, pues respondería a la creciente percepción de inseguridad en el país, buscando mejorar la coordinación en la formulación y seguimiento de políticas de seguridad ciudadana.

9. El **Ministerio Público** reconoce la **viabilidad** del incremento de sesiones virtuales del CONASEC para fortalecer la toma de decisiones en seguridad ciudadana. No obstante, plantea que la implementación debe estar acompañada de un análisis multisectorial sobre la efectividad de los planes existentes y su adecuación al contexto actual. Se sugiere que dichas sesiones sean realizadas por equipos técnicos especializados, lo que permitiría debates más profundos y acciones articuladas para la reducción de la criminalidad.

10. El **Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables** señala que el proyecto de ley regula materias que no forman parte de las competencias de dicho sector.

11. El **Ministerio de Educación** sostiene que el planteamiento de sesiones virtuales mensuales del CONASEC **no es viable**, debido a que la ley vigente ya permite convocar reuniones extraordinarias y que no se justifica cómo el aumento de sesiones reduciría la inseguridad ciudadana.

12. La **Municipalidad Metropolitana de Lima** emite opinión **favorable en parte**, concluye que, aunque el incremento de sesiones podría mejorar la toma de decisiones en seguridad ciudadana, el número propuesto (16 reuniones anuales) resulta excesivo dada la carga de trabajo de sus integrantes; en ese sentido, recomienda reducir las sesiones virtuales a ocho por año, complementadas con cuatro presenciales, asegurando eficacia sin afectar la operatividad de los altos funcionarios del Estado.

13. El **Ministerio de Transportes y Comunicaciones observa** la propuesta, por cuanto no fundamenta adecuadamente la necesidad de incrementar la frecuencia de reuniones ni su impacto en la seguridad ciudadana. Además, señala que el proyecto no es competencia del MTC, salvo por su rol en el CONASEC.

**o. Proyecto de Ley 10188/2024-CR**

**1.** La **Asociación de Municipalidades del Perú** emite opinión **favorable**, concluyendo que la propuesta es pertinente y necesaria para mejorar la

coordinación y operatividad del CONASEC, sin afectar la autonomía municipal

### 5.3 Análisis técnico

De la revisión de las iniciativas legislativas acumuladas en el presente dictamen, se desprende que estas tienen como común denominador, el tema de la seguridad ciudadana, definida en el artículo 2 de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana - SINASEC, como la acción integrada y articulada que desarrolla el Estado, en sus tres niveles de gobierno, con la participación del sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.

De acuerdo a la norma glosada, se desprende que la finalidad de las acciones adoptadas en materia de seguridad ciudadana, es coadyuvar con el bienestar de la población en general, el cual se encuentra en permanente peligro de afectación por los altos índices de inseguridad que diariamente se manifiesta a través de la comisión de múltiples ilícitos penales.

Si observamos detenidamente nuestra realidad, veremos que el principal problema que preocupa a la sociedad es el tema de la inseguridad ciudadana. Al respecto, el Informe Técnico N° 06 – Noviembre 2024, titulado "*Estadísticas de Seguridad Ciudadana Mayo – Octubre 2024*", publicado en el portal web del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, link: https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_seguridad_mayo_octubre-2024.pdf, demuestra que el 85,6% de la población se siente insegura de vivir en el Perú, porcentaje que también corresponde a la percepción que esta tiene sobre la inseguridad en los próximos doce meses, tal se muestra a continuación:

**Cuadro Nº 63**
**POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LOS PRÓXIMOS DOCE MESES, POR ÁMBITO DE ESTUDIO**
Semestre: Mayo – Octubre 2024
(Porcentaje)

| Semestre móvil | Nacional urbano | Principales ciudades de 20 mil a más habitantes 1/ | Centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes 2/ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total | Ciudades no priorizadas con más de 20 mil habitantes | Centros poblados urbanos 3/ |
| May 2022 - Oct 2022 | 85,0 | 87,4 | 78,7 | 82,7 | 74,6 |
| Jun 2022 - Nov 2022 | 84,6 | 86,6 | 79,2 | 83,3 | 75,2 |
| Jul 2022 - Dic 2022 | 83,8 | 86,1 | 77,9 | 81,7 | 73,9 |
| Ago 2022 - Ene 2023 | 84,1 | 86,3 | 78,3 | 82,4 | 73,7 |
| Set 2022 - Feb 2023 | 83,3 | 85,6 | 77,5 | 81,9 | 72,8 |
| Oct 2022 - Mar 2023 | 82,5 | 84,6 | 77,1 | 80,5 | 73,7 |
| Nov 2022 - Abr 2023 | 82,5 | 84,4 | 77,7 | 81,0 | 74,1 |
| Dic 2022 - May 2023 | 82,7 | 84,6 | 77,8 | 81,5 | 73,7 |
| Ene 2023 - Jun 2023 | 82,6 | 84,4 | 77,9 | 81,3 | 74,4 |
| Feb 2023 - Jul 2023 | 82,5 | 84,2 | 78,0 | 81,5 | 74,6 |
| Mar 2023 - Ago 2023 | 83,1 | 84,7 | 78,7 | 82,3 | 75,4 |
| Abr 2023 - Set 2023 | 83,4 | 84,9 | 79,5 | 83,1 | 76,2 |
| May 2023 - Oct 2023 | 83,4 | 84,9 | 79,3 | 82,8 | 76,3 |
| Jun 2023 - Nov 2023 | 83,6 | 85,2 | 79,4 | 82,6 | 76,5 |
| Jul 2023 - Dic 2023 | 84,1 | 85,4 | 80,5 | 83,8 | 77,5 |
| Ago 2023 - Ene 2024 P/ | 84,3 | 85,6 | 81,0 | 83,7 | 78,5 |
| Set 2023 - Feb 2024 P/ | 84,5 | 85,5 | 80,8 | 83,6 | 77,8 |
| Oct 2023 - Mar 2024 P/ | 85,0 | 86,7 | 80,5 | 83,6 | 77,3 |
| Nov 2023 - Abr 2024 P/ | 85,4 | 87,4 | 80,5 | 83,0 | 77,7 |
| Dic 2023 - May 2024 P/ | 85,9 | 87,6 | 81,6 | 83,8 | 79,3 |
| Ene 2024 - Jun 2024 P/ | 86,1 | 87,9 | 81,8 | 83,6 | 79,9 |
| Feb 2024 - Jul 2024 P/ | 86,2 | 88,1 | 81,6 | 83,1 | 80,1 |
| Mar 2024 - Ago 2024 P/ | 85,9 | 87,4 | 82,1 | 82,8 | 81,4 |
| Abr 2024 - Set 2024 P/ | 85,7 | 87,3 | 81,8 | 83,2 | 80,5 |
| May 2024 - Oct 2024 P/ | 85,6 | 87,0 | 81,9 | 84,1 | 80,1 |
| **Diferencia con similar semestre móvil May 2022 – Oct 2022 (puntos porcentuales)** | | | | | |
| May 2022 - Oct 2022 | | | | | |
| May 2024 - Oct 2024 P/ | 0,6 | -0,4 | 3,2 | 1,4 | 5,5 |
| **Diferencia con similar semestre móvil May 2023 – Oct 2023 (puntos porcentuales)** | | | | | |
| May 2023 - Oct 2023 | | | | | |
| May 2024 - Oct 2024 P/ | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 1,3 | 3,8 |

El 85,6% de la población del área urbana a nivel nacional percibe que en los próximos doce meses puede ser víctima de algún hecho delictivo que atente contra su seguridad, al comparar el semestre móvil similar mayo - octubre 2023, la percepción aumentó 2,2 puntos porcentuales.

En las principales ciudades de 20 mil a más habitantes, el 87,0% de la población percibe que puede ser víctima de algún hecho delictivo, en tanto, en los centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes la cifra alcanza el 81,9%.

En ese sentido, si bien en nuestro ordenamiento jurídico interno se encuentra vigente la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que tiene por objeto proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional, no es menos cierto que, la estadística que precede, representa el malestar de la población que ha sido o considera que podría ser víctima de la inseguridad ciudadana, pues esta se ha convertido en uno de los problemas más graves y urgentes que enfrenta nuestro país, afectando la calidad de vida, el desarrollo económico y la estabilidad social.

La inseguridad ciudadana ha crecido de manera exponencial en los últimos años, esto se debe principalmente a la presencia de grupos delictivos como el Tren de Aragua; por ende, resulta necesario que, se preste mayor atención a esta problemática, pues la búsqueda de la seguridad debe ser un esfuerzo colectivo en el que todas las personas y unidades políticas deben participar.

Precisamente, los proyectos de ley bajo análisis, tienen por finalidad contribuir al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, conforme se detalla y evalúa a continuación:

**a. Análisis del proyecto de ley que propone declarar en emergencia el parque automotor e infraestructura de la Policía Nacional (PL 2488)**

El Proyecto de Ley 2488/2021-CR busca declarar de interés nacional y necesidad pública la emergencia del parque automotor policial y la

infraestructura de las comisarías de la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia.

Según el Reporte de capacidad vehicular proporcionado por el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana[3], actualizado a diciembre de 2024, de un total de 19.591 vehículos policiales, sólo 11.866 se encuentran en estado operativo, 3.618 en estado inoperativo recuperable y 4.107 en estado inoperativo irrecuperable, conforme se visualiza en la siguiente estadística:

VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

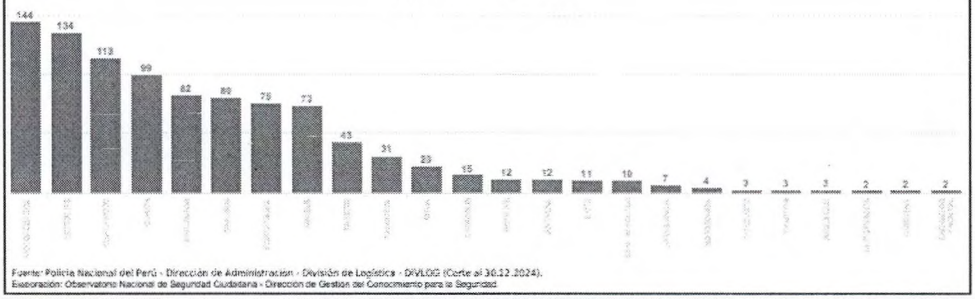
**2. Flota vehicular por tipo de vehículo y estado de operatividad, diciembre 2024**

**Total de vehículos**

| 19,591 | 11,866 | 3,618 | 4,107 |
|---|---|---|---|

| TIPO DE VEHÍCULO | TOTAL | OPERATIVO | INOPERATIVO RECUPERABLE | INOPERATIVO IRRECUPERABLE |
|---|---|---|---|---|
| AUTO | 1,117 | 579 | 102 | 436 |
| CAMIONETA | 7,882 | 4,790 | 1,418 | 1,674 |
| MOTOCICLETA | 9,609 | 6,025 | 1,892 | 1,692 |
| OTROS (*) | 983 | 472 | 206 | 305 |

**(*) OTROS VEHÍCULOS**




Fuente: Policía Nacional del Perú - Dirección de Administración - División de Logística - DIVLOG (Corte al 30.12.2024).
Elaboración: Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana - Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad

**FUENTE:** Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana

En virtud de esta información, se desprende que, aproximadamente sólo el 60% de las unidades vehiculares se encontrarían operativas, el déficit alcanza a casi el 40% de la flota vehicular. Por lo tanto, este factor, junto a la precariedad de la infraestructura de las comisarías, afecta directamente la capacidad operativa de la Policía Nacional. Actualmente, la delincuencia ha aumentado en diversas regiones del país, por lo que fortalecer la capacidad logística y operativa de la policía es una medida relevante.

Sin embargo, la iniciativa legislativa propone solucionar este gran problema mediante la promulgación de una ley de carácter declarativa, sin establecer

[3] https://observatorio.mininter.gob.pe/content/reporte-de-capacidad-vehicular

acciones específicas para remediar la crisis del parque automotor ni de las comisarias, sólo se limita exhortar al Poder Ejecutivo para que coordine con los gobiernos regionales y locales la realización de acciones necesarias y urgentes al respecto.

Sobre el particular, es necesario mencionar que, en principio, corresponde a la propia Policía Nacional del Perú y al Ministerio del Interior, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y conforme a la normativa que rige su funcionamiento, mantener y renovar su parque automotor y la infraestructura en general, para ello deberían programar en sus proyectos de presupuesto el mantenimiento correspondiente y las adquisiciones que sean necesarias para el cumplimiento de su función.

Adicionalmente, es oportuno traer a colación que, el artículo 1 de la Ley 29010 faculta a los gobiernos regionales y locales a disponer recursos propios a favor de la Policía Nacional del Perú para fortalecer la seguridad ciudadana, infraestructura y equipamiento para mejorar, entre otros, la capacidad operativa de los servicios policiales. En la misma línea, el numeral 4.3 del artículo 4 del Decreto Legislativo 1316 que regula la cooperación de la PNP con las Municipalidades para fortalecer el Sistema de Seguridad Ciudadana establece que la primera debe informar a la segunda sus deficiencias de infraestructura, limitaciones y recomendar las mejoras necesarias que coadyuven con su función policial. Esto significa que los gobiernos subnacionales, actualmente, pueden complementar los esfuerzos del gobierno central, contribuyendo con el mejoramiento de las comisarías y la adquisición de patrulleros u otros equipos indispensables. Por lo tanto, la propuesta deviene en innecesaria.

**b. Análisis de la propuesta para declarar en emergencia el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (PL 3349)**

La iniciativa legislativa 3349/2022-CR tiene por objeto declarar en emergencia el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y regular, por necesidad pública de carácter impostergable, su proceso de reforma, a fin de revertir la aguda crisis y prevenir y reprimir la criminalidad y delincuencia común por los componentes que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. La iniciativa legislativa contiene seis artículos y nueve disposiciones complementarias finales.

A efectos del análisis correspondiente, debemos tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución Política, la declaratoria de los estados de excepción corresponde al Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros. Señala también que los estados de excepción pueden ser de dos clases: i) estado de emergencia y ii) estado de sitio. Al respecto, en el fundamento 8 de la sentencia N° 948/2020, recaída en el Expediente N° 00964-2018-PHC/TC, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente:

*8. En efecto, y tal como se aprecia, este Tribunal Constitucional ha sido claro en señalar que la declaratoria de un estado de excepción depende del análisis de cada caso concreto por parte de la autoridad competente; y, que, en cualquier caso, siempre debe ser empleada como un mecanismo de último recurso, puesto que la función de todo régimen jurídico establecido es prever las situaciones de conflicto, dejando las regulaciones excepcionales para, valga la redundancia, situaciones excepcionales.*

Conforme se desprende del texto de la Carta Magna y de la sentencia del Supremo intérprete de la Constitución, la declaratoria de los estados de emergencia es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo; por ello, en virtud del principio de separación de poderes consagrado en el artículo 43 de la Norma Constitucional, así como del principio de competencia regulado en el artículo VI del Título Preliminar de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, aprobado por la Ley 29158, resulta inviable que el Congreso de la República asuma una función que le corresponde a otro poder del Estado.

Además, una declaratoria de emergencia, debe ser un mecanismo de último recurso. En el presente caso, se propone declarar en emergencia el Sistema Nacional de Seguridad de Ciudadana, el cual fue creado por la Ley 27933. Sobre el particular, dicha ley contempla en su artículo 3 que, el SINASEC es el encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana para garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional para lograr una situación de paz social y protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Es decir, el SINASEC es un sistema funcional diseñado para coordinar la seguridad ciudadana de manera permanente, por lo que su fortalecimiento debe realizarse mediante políticas públicas efectivas, no mediante medidas extraordinarias de duración limitada. Declararlo en emergencia implicaría asumir que, esta medida es el último recurso al cual se puede recurrir para resolver el problema de la inseguridad ciudadana; sin embargo, esta Comisión considera que ello no es así, toda vez que, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana contiene un conjunto de normas que establecen, entre otros, las funciones que debe cumplir el Ministerio de Interior como ente rector de este Sistema, así como las competencias del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, de los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana, de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana y de los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana.

En otras palabras, actualmente, ya existe un marco normativo que regula el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual precisa que los órganos que lo conforman tienen como atribuciones, dentro de sus respectivas jurisdicciones, entre otros, proponer la aprobación del Plan Nacional, Regional, Provincial o Distrital de Seguridad Ciudadana, así como proponer la aprobación de planes, programas y proyectos en esta materia. En ese sentido, consideramos que, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, a

fin de dar cumplimiento a sus funciones, debe tomar en cuenta nuestra realidad y proponer planes que coadyuven a la reducción de los índices de inseguridad ciudadana.

La iniciativa legislativa también propone que, durante el periodo de emergencia, se desarrollen intervenciones institucionales, legislativas, operativas y presupuestales destinadas a consolidar y fortalecer el CONASEC, CORESEC, COPROSEC y CODISEC. En cuanto a este extremo de la propuesta debemos mencionar que estos órganos, componentes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se encuentran integradas por entidades públicas; por lo tanto, no se comprende de qué manera se podría intervenir estas instituciones. Además, si se considera que dichos órganos deben ser fortalecidos, se debe proponer modificaciones a la Ley N° 27933 que es la norma que los regula.

De igual manera, respecto a la propuesta de consolidar la rectoría del Ministerio del Interior, debemos mencionar que la Ley 27933 ya regula las funciones de este ministerio en materia de seguridad ciudadana, por lo que, de considerar que esta rectoría necesita ser reforzada, lo más viable sería proponer reformas a esta ley.

Sobre las medidas para mejorar los recursos humanos en seguridad ciudadana, el proyecto de ley propone que, durante la declaratoria de emergencia, el Poder Ejecutivo otorgue el seguro de vida a los miembros de la Policía Nacional del Perú, otorgándoles como mínimo los beneficios por fallecimiento de trabajador a consecuencia de un accidente y por invalidez total y permanente del trabajador originada por accidente en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia. Al respecto, a juicio de la Comisión, tal planteamiento infringe lo establecido en el artículo 79 de la Constitución Política, toda vez que, de aprobarse, implicaría la creación o el aumento del gasto público, lo cual se encuentra proscrito para el Congreso de la República.

También se plantea que, el Ministerio del Interior y las Escuelas de Oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, modifiquen su manual de organización y funciones, cuadro de asignación de personal y su presupuesto analítico de personal, a fin de incorporar progresivamente nuevo personal e ingresantes a las escuelas policiales. Sobre este particular, es necesario señalar que, la eventual aprobación de esta medida podría impactar en la autonomía de las entidades responsables de la implementación de las políticas públicas en el sector interior, toda vez que, de acuerdo, con el artículo 119 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los Ministerios son los encargados de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de estas.

En el mismo sentido, debemos opinar respecto de las medidas planteadas para mejorar los recursos y servicios de seguridad ciudadana, pues la

priorización de equipamiento e infraestructura necesaria, corresponde a la planificación y gestión del sector interior.

Respecto a lo descrito en las Disposiciones Complementarias Finales, la comisión mixta que se pretende conformar, son creados por ley, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; por lo tanto, la propuesta para la creación de esta comisión no se encuentra acorde a la normatividad.

En virtud de las consideraciones expuestas, esta Comisión estima que la propuesta normativa no es viable.

**c. Análisis de las propuestas para incorporar el enfoque de interculturalidad al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (PL 1464)**

La fórmula legal del Proyecto de Ley N° 1464/2021-CR propone incluir el enfoque de interculturalidad en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, para tal efecto propone, entre otros, modificar los artículos 2 y 3 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, conforme al siguiente detalle:

| Ley 27933 | PL 1464/2021-CR |
|---|---|
| **Artículo 2.- Seguridad Ciudadana**<br>Se entiende por Seguridad Ciudadana, para efectos de esta Ley, a la acción multisectorial, integrada y articulada que desarrolla el Estado, en sus tres niveles de gobierno, con la participación del sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, a través de la prevención, control, sanción y reinserción social, para garantizar una convivencia pacífica, la erradicación de la violencia interpersonal y la utilización libre de miedos de los espacios públicos frente a los diversos tipos de criminalidad nacional e internacional. | **Artículo 2.- Seguridad Ciudadana**<br>Se entiende por Seguridad Ciudadana, para efectos de esta Ley, a la acción integrada y articulada que desarrolla el Estado, en sus tres niveles de gobierno, **con enfoque de interculturalidad y** con la participación de la ciudadanía **y pueblos originarios**, destinada a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.<br><br>**La seguridad ciudadana con enfoque de interculturalidad valoriza e incorpora las diferentes visiones culturales y concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales en cada circunscripción. Se basa en el diálogo intercultural y la atención diferenciada a estos grupos, según sus características geográficas, ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales.**<br><br>**En los territorios de comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas o pueblos originarios, o en espacios ocupados o utilizados por estas colectividades sociales, la seguridad ciudadana se ejerce de forma coordinada con ellas, observando el enfoque de interculturalidad y las atribuciones** |

| | |
|---|---|
| | **jurisdiccionales consagradas en el artículo 149 de la Constitución Política.** |
| **Artículo 3.-Sistema Funcional**<br>[...]<br>Son objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) los siguientes:<br>[...] | **Artículo 3.-Sistema Funcional**<br>[...]<br>Son objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) los siguientes:<br>[...]<br>**h. Asegurar una política de seguridad ciudadana intercultural, a fin de garantizar la coordinación y cooperación eficiente y eficaz entre los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y los pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas.** |

Al respecto, es menester señalar que el Ministerio de Cultura[4] ha identificado la existencia de 55 de estos colectivos, 51 en la Amazonía y 4 en los Andes; además, según los Censos Nacionales 2017, el 25% de la población nacional se identifica como indígena u originaria. Es decir, el Perú es un país pluricultural y multilingüe con una diversidad de formas de organización social y mecanismos propios de resolución de conflictos. Por lo tanto, el enfoque intercultural permite diseñar estrategias de seguridad acordes a las necesidades y costumbres de esta población.

No obstante, debemos mencionar que ya en el año 2018, mediante el Decreto Legislativo N° 1454, se modificó varios artículos de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, incorporando el componente cultural para hacer más inclusivo la seguridad ciudadana; así, se introdujo a las rondas campesinas en los Comités Distritales y Provinciales de Seguridad Ciudadana.

Actualmente, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana ya contiene disposiciones que incluyen el enfoque intercultural. Por ejemplo, el inciso a) del artículo 9 de la mencionada ley señala que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana tiene por función el proponer ante la Presidencia del Consejo de Ministros, la aprobación de instrumentos sobre seguridad ciudadana tomando en consideración las particularidades culturales y lingüísticas de la población. Asimismo, el literal f) del artículo 11 prescribe que la Secretaría Técnica es el órgano técnico, multidisciplinario, ejecutivo y de coordinación, encargado de difundir y promover los mecanismos de acceso de los órganos del SINASEC a los fondos públicos disponibles para mejorar la seguridad ciudadana, considerando los lineamientos referidos a las lenguas indígenas u originarias según las zonas de predominancia establecidas en el Mapa Etnolingüístico del Perú, en el marco de la Ley N° 29735, Ley de Lenguas Originarias y su Reglamento.

4 https://bdpi.cultura.gob.pe/index.php/pueblos-indigenas

Por otro lado, en cuanto al ámbito regional, los literales a) y b) del numeral 17.1 del artículo 17 de la Ley, establecen que el Comité Regional de Seguridad Ciudadana tiene como función el proponer ante el Gobierno Regional la aprobación del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana alineado al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y sus medidas sectoriales, elaborado bajo sus enfoques transversales, y articulado con los instrumentos del SINAPLAN; así como, proponer ante el Gobierno Regional la aprobación de planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana de relevancia regional, tomando en consideración las particularidades culturales y lingüísticas de la población.

En el mismo sentido, en el nivel provincial, el literal a) del numeral 17.3 del artículo 17 de la Ley, dispone que el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana tiene dentro de sus competencias el proponer ante la Municipalidad Provincial, la aprobación del Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo un enfoque descentralizado, de gestión por resultados, intercultural, alineado al Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana, y articulado con los instrumentos del SINAPLAN. b) Proponer ante la Municipalidad Provincial, los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana en sus respectivas jurisdicciones, supervisando su cumplimiento en el marco de los lineamientos establecidos en el Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana, tomando en consideración las particularidades culturales y lingüísticas de la población.

Finalmente, a nivel distrital, además de repetir lo dispuesto para el nivel provincial, se agrega como atribución el "promover y articular estrategias de prevención de la violencia y el delito, dando prioridad a los territorios más vulnerables de la jurisdicción, tomando en consideración las particularidades culturales y lingüísticas de la población".

Como se puede apreciar, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana ya prevé la aplicación del enfoque intercultural en la elaboración de los planes de acción a nivel nacional, regional, provincial y distrital.

**d. Análisis de las propuestas que plantean incrementar el número de sesiones descentralizadas del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (PLs 2041, 6420, 8227, 8418 y 10188)**

Los Proyectos de Ley 2041/2021-CR, 6420/2023-CR, 8227/2023-CR, 8418/2023-CR y 10188/2024-CR proponen la modificación del artículo 5 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de incrementar la cantidad de sesiones ordinarias y descentralizadas, así como la modalidad y los lugares a realizarse, esto conforme al siguiente detalle:

| | SESIONES ORDINARIAS |
|---|---|
| **LEY 27933** | 4 veces al año, de las cuales, por lo menos 2 descentralizadas |
| **PL 2041** | 4 veces al año, de las cuales, por lo menos **3** descentralizadas |
| **PL 6420** | **12** veces al año, de las cuales **4** descentralizadas |

| | |
|---|---|
| **PL 8227** | **6** veces al año, de las cuales, por lo menos 2 descentralizadas **en departamentos con alto porcentaje de criminalidad** |
| **PL 8418** | 4 veces al año, de las cuales, por lo menos 2 descentralizadas **12 veces al año en sesiones virtuales (1 por mes)** |
| **PL 10188** | **6** veces al año, de las cuales, por lo menos 2 descentralizadas **en zonas de mayor incidencia delictiva** |

Sobre el particular, la Comisión ha recibido las opiniones institucionales de varios de los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, los cuales están divididos entre los que se encuentran a favor y los que se pronuncian en contra. Los primeros señalan que el incremento de las sesiones ordinarias facilitaría la evaluación continua de las políticas y permitiría ajustar estrategias; mientras que, los segundos sostienen básicamente que las propuestas no se justifican ni se encuentran respaldadas en datos que evidencien que el aumento del número de sesiones tendrá un impacto directo en la reducción de la seguridad ciudadana; además, indican que la ley vigente permite convocar sesiones extraordinarias cuando el presidente lo estime conveniente.

Al respecto, la Comisión considera que la seguridad ciudadana es un problema dinámico que requiere de evaluaciones y ajustes de estrategias constantes; por lo que, aumentar la cantidad de sesiones ordinarias al año coadyuvará a fortalecer la capacidad de respuesta del CONASEC frente a las amenazas delictivas, pues le permitirá evaluar con mayor frecuencia la situación de la seguridad en el país, así como corregir estrategias y contribuir a una supervisión más efectiva sobre la ejecución de planes y acciones.

Si bien la mayor frecuencia de reuniones no garantiza necesariamente mejores resultados, si contribuirá a una mejor articulación entre todos los actores responsables mediante la evaluación de estrategias que permitan abordar los nuevos desafíos con mayor rapidez.

En ese sentido, considerando que la Ley del SINASEC actualmente contempla que el presidente del CONASEC puede convocar a sesiones extraordinarias cuando las circunstancias lo ameriten y que sus integrantes pueden conformar mesas de trabajo para el desarrollo de agendas o encargos puntuales, la Comisión considera que las sesiones ordinarias deben realizarse 6 veces al año, es decir, como mínimo una sesión cada dos meses.

Sin embargo, sobre el incremento del número de sesiones descentralizadas se debe tener en cuenta que estos tipos de sesiones implican mayores costos para su implementación, pues naturalmente se deben efectuar desembolsos económicos para el traslado, logística y personal. Por lo tanto, considerando que el artículo 79 de la Constitución Política prohíbe al Congreso de la República crear o aumentar el gasto público, las propuestas en este extremo resultan inviables, toda vez que implicaría una mayor carga presupuestaria para las entidades involucradas.

Ahora bien, en cuanto a la propuesta de realización de sesiones en la modalidad virtual, se debe considerar por lo menos dos aspectos importantes. El primero consiste en reconocer que la tecnología ha demostrado (como por ejemplo en la pandemia del Covid-19) ser una herramienta digital clave en la gestión pública; por lo tanto, su incorporación en la dinámica del CONASEC podría mejorar significativamente su operatividad. El segundo aspecto tiene que ver con la organización de las sesiones presenciales, pues estas implican necesariamente la realización de gastos asociados a transportes, viáticos, y logísticos de los miembros del CONASEC; por ende, las reuniones virtuales pueden reducir algunos gastos. En otras palabras, la incorporación de la modalidad virtual podría permitir mayor flexibilidad en la convocatoria de las sesiones, facilitando la participación de autoridades sin necesidad de desplazamientos constantes.

**e. Análisis de las iniciativas legislativas que proponen incorporar nuevos integrantes al CONASEC (PLs 29, 54, 1059, 1464, 2041, 3552, 4751, 6420, 10188 y 10284)**

Los Proyectos de Ley 029/2021-CR, 054/2021-CR, 1059/2021-CR, 1464/2021-CR, 2041/2021-CR, 3552/2022-CR, 4751/2022-CR, 6420/2023-CR, 10188/2024-CR y 10284/2024-CR plantean modificar el artículo 7 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con el objeto de incorporar a nuevos miembros dentro de la composición del CONASEC, conforme se detalla a continuación:

| PROYECTOS DE LEY | PROPUESTAS |
|---|---|
| PL 29 | El Comandante General de la Marina de Guerra del Perú |
| PL 54 | Un representante de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, elegido por sus coordinadores regionales |
| PL 1059 | - Un representante nacional de las organizaciones representativas de las Rondas Campesinas.<br>- Un representante de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana |
| PL 1464 | Un representante de la Central única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARCP-PERÚ) elegido en asamblea |
| PL 2041 | - Un(a) representantes de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.<br>- Un(a) representantes de las organizaciones representativas de Rondas Campesinas. |
| PL 3552 | El coordinador Nacional de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana |
| PL 4751 | El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República. |
| PL 6420 | Un congresista designado por el Congreso de la República |
| PL 10188 | - El presidente de la República, quien preside.<br>- El Presidente del Congreso de la República.<br>- Dos representantes del sector privado, designado entre los gremios empresariales, por el periodo de un (1) año.<br>- Dos representantes de la sociedad civil, designados por el periodo de un año |
| PL 10284 | - Un representante de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana, Callao y Lima Región. |

| | |
|---|---|
| | - Un representante de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de la zona Sur (Arequipa, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Puno, Tacna y Moquegua), de la zona Centro (Ancash, Junín, Pasco, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho), de la zona Norte (Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, San Martín y Tumbes) y de la zona Oriente (Loreto, Ucayali, Amazonas y San Martín).<br>- El/la Superintendente Nacional de Migraciones. |

De acuerdo con la Ley 27933, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana es el encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana. Está integrado, entre otros, por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual es el máximo organismo encargado de orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas en esta materia.

Precisamente, es la conformación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, lo que las iniciativas legislativas proponen modificar, incorporando miembros adicionales. Así, el Proyecto de Ley 29/2021-CR plantea que se incluya entre sus integrantes al Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, a fin de incrementar los alcances del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, sobre vigilancia y protección de los intereses nacionales en el ámbito marítimo, fluvial, y lacustre.

Si bien la propuesta busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado en espacios fluviales y marítimos, el CONASEC es un órgano diseñado para la seguridad ciudadana, esto es, el orden interno y la prevención y combate de la delincuencia, cuya competencia principal recae en la Policía Nacional, bajo la rectoría del Ministerio del Interior, en concordancia con el artículo 166 de la Constitución Política.

En cambio, de acuerdo con el artículo 165 de la norma constitucional, las Fuerzas Armadas tienen la función de garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial del país. Si bien es cierto están facultadas para participar del orden interno, esta se encuentra circunscrita a los regímenes de excepción, tales como, el estado de emergencia y el estado de sitio, por lo que, su participación en el control del orden interno no es permanente, al ser esta una tarea de la Policía Nacional del Perú. En otras palabras, la intervención de la Marina de Guerra en seguridad ciudadana solo podría ocurrir en situaciones excepcionales y bajo condiciones estrictas, cuando el Presidente de la República decrete un estado de emergencia, conforme al artículo 137 de la Constitución.

Además, la Marina de Guerra tiene un ámbito de actuación limitado a zonas marítimas, fluviales y costeras, mientras que la criminalidad en el país no se restringe solo a esos espacios. No obstante, el último párrafo del artículo 7, así como el artículo 8 de la Ley 27933, dejan abierta la posibilidad de que el CONASEC invite a otras autoridades públicas cuando lo considere conveniente y de acuerdo a la temática específica a tratar.

Sin perjuicio de lo expuesto, es importante mencionar que la Marina de Guerra cumple un rol fundamental en el Sistema de Defensa Nacional – SIDENA, el cual está regulado por el Decreto Legislativo 1129. Su intervención se basa en garantizar la defensa y soberanía del país, especialmente en el dominio marítimo y fluvial, ante amenazas externas. En ese sentido, forma parte del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional – COSEDENA.

Por consiguiente, dado que las disposiciones establecidas en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana están referidas al orden interno, en situaciones normales, cuando no estamos en estado de excepción, la propuesta legislativa no es viable, en razón que la presencia del representante de las Fuerzas Armadas no es constante.

Por otro lado, los Proyectos de Ley 54/2021-CR, 1059/2021-CR, 2041/2021-CR, 3552/2022-CR y 10284/2024-CR, proponen incluir a un representante de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana dentro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

Al respecto, según el artículo 2 de la Ley N° 29701, Ley que dispone beneficios a favor de los integrantes de las Juntas Vecinales y establece el Día de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, se entiende por estas, a las *organizaciones sociales de base, promovidas por la Policía Nacional del Perú, que tienen por misión desarrollar actividades preventivas, informativas y de proyección social en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para mejorar la seguridad ciudadana mediante el trabajo voluntario no remunerado y participativo, promueven y desarrollan programas de prevención y servicio a la comunidad.*

*Añade la norma citada que, las juntas vecinales de seguridad ciudadana como agentes de la sociedad están en capacidad de participar, formular y sustentar proyectos de desarrollo integral ante las instancias de presupuesto participativo en su condición de agente participante, así como acreditar profesionales calificados para integrar el equipo técnico del presupuesto participativo de su jurisdicción.*

Las juntas vecinales están conformadas por los propios vecinos de una determinada comunidad que trabajan de manera voluntaria vigilando sus calles para que la delincuencia no siga creciendo y afectando a sus vecinos. Su estructura organizativa está compuesta de una directiva, coordinadores distritales, zonales y vecinales que responden a su comisaría y están a cargo de los vecinos vigilantes. Ellos coordinan con la policía comunitaria, que les brindan talleres de capacitación para mejorar su trabajo de prevención frente a la violencia.

Es así que, reconociendo la fuerza, compromiso y solidaridad que caracteriza a las Juntas Vecinales, sus representantes participan en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, aunque su alcance se encuentra limitado a una determinada circunscripción territorial, es decir, su actuación es focalizada.

De allí que cuenten con un representante dentro de los Comités Regionales (CORESEC), Provinciales (COPROSEC) y Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC), espacios en los cuales pueden canalizar sus propuestas.

Sin embargo, a nivel nacional no cuentan con dicha representación. El motivo es sencillo, las Juntas Vecinales se organizan y desarrollan en sus respectivas comunidades y zonas, no tienen alcance nacional. Por tal motivo, la propuesta para que se les incorpore como parte del Consejo Nacional de Seguridad Nacional deviene en injustificada e inviable.

Por su parte, los Proyectos de Ley 1059/2021-CR, 1464/2021-CR y 2041/2021-CR plantean que las rondas campesinas también formen parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

El artículo 1 de la Ley 27908, Ley de Rondas Campesinas, dispone que estas formas de organización comunal *apoyan el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas*; asimismo, *colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley, así como funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial*.

En un principio, las rondas surgieron como grupos de vigilancia nocturna, convirtiéndose con el tiempo, en un sistema de autoridad comunal propio dentro de su ámbito territorial, ante los cuales se presentan y discuten todo tipo de conflictos y problemas.

Aunque la función de las rondas campesinas también se desarrolla en el ámbito de la seguridad ciudadana, sus atribuciones principalmente versan sobre la solución de conflictos de carácter jurisdiccional en una determinada comunidad. Por ello, a juicio de esta Comisión, nos parece acertada que estas organizaciones tengan representación en Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, como de hecho lo tienen, de acuerdo al literal j) del artículo 15 y literal f) del artículo 16 de la Ley del SINASEC.

Sin embargo, no compartimos la idea de que deban tener un representante en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, puesto que, a diferencia de las Juntas Vecinales, que son creadas exclusivamente por temas de seguridad ciudadana, las rondas campesinas tienen como función primordial el de servir de apoyo en la solución de controversias jurisdiccionales.

Además, tal como lo han señalado el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como el Poder Judicial, las rondas campesinas carecen de una representación nacional, puesto que, ni la Ley de Rondas Campesinas ni su reglamento prevén un mecanismo de elección de su representante a nivel nacional; por lo tanto, no resulta viable su incorporación como parte integrante del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

De otro lado, las iniciativas legislativas 4751/2022-CR, 6420/2023-CR y 10188/2024-CR plantean incorporar a un Congresista de la República como parte integrante del CONASEC, tales como el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra Las Drogas, el presidente del Parlamento o uno designado por el Pleno del Congreso. Sobre el particular, es necesario señalar que, según la Carta Magna, son funciones esenciales de los congresistas el representar, legislar y fiscalizar. La ejecución de políticas públicas le corresponde al Poder Ejecutivo, la seguridad ciudadana no es la excepción.

A raíz de la emisión del Decreto Legislativo 1618 en diciembre de 2023, se actualiza la Ley 27933, con lo cual, actualmente, el Congreso de la República cuenta con mecanismos de control y fiscalización sobre seguridad ciudadana. El literal d) del artículo 9 de la Ley 27933 establece que *el CONASEC informa anualmente a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas sobre las políticas, los planes, programas, estrategias y proyectos de seguridad ciudadana.* En virtud de ello, la Comisión se encuentra facultada para citar a los actores involucrados y profundizar en el análisis de las políticas de seguridad. No obstante, en el siguiente punto a evaluar, la Comisión propone modificar dicha disposición a fin de que el informe se brinde a todo el Pleno del Congreso, garantizando un mayor control político y una rendición de cuentas más amplia ante toda la representación nacional y la ciudadanía.

Si un congresista formara parte del CONASEC, estaría participando en la toma de decisiones del propio Ejecutivo, lo que podría afectar la imparcialidad al momento de ejercer control sobre esas mismas políticas. No resulta razonable que un congresista tome decisiones en el CONASEC y, al mismo tiempo, fiscalice las acciones derivadas de esas decisiones, esto podría reducir la eficacia del control político.

El Proyecto de Ley 10188/2024-CR también plantea que representantes del sector privado y de la sociedad civil integren también el CONASEC. Sin embargo, el último párrafo del artículo 7 de la Ley 27933 ya permite su participación sin necesidad de ser miembros permanentes, pues contempla que el presidente del CONASEC, esto es, el Presidente del Consejo de Ministros, pueda invitar a representantes de estos colectivos cuando lo considere pertinente. En ese sentido, considerando que la seguridad ciudadana no es solo responsabilidad del Estado sino también de la sociedad civil y el sector privado, la norma prevé su participación previa invitación.

Por último, la iniciativa legislativa 10284/2024-CR propone que se incluya dentro de la composición del CONASEC al Superintendente Nacional de Migraciones. Sobre el particular, cabe señalar que, durante los últimos años, el Perú ha experimentado un aumento en la llegada de migrantes, en parte debido a crisis en países vecinos y a procesos migratorios irregulares. Este

incremento ha llevado a una mayor concentración de personas en ciertos sectores donde la vulnerabilidad social puede favorecer la comisión de delitos.

Según las estadísticas, la incidencia de ciertos delitos como robos, extorsiones y otros contra el patrimonio ha crecido a un ritmo alarmante. Muchos de los ilícitos penales se atribuyen a ciudadanos extranjeros y se asocia, en parte, a problemas de control y coordinación en el ámbito migratorio.

En ese sentido, considerando que el artículo 2 del Decreto Legislativo 1130, Decreto Legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Migraciones, otorga competencia a este organismo técnico especializado en materia de política migratoria interna y participación en la política de seguridad interna y fronteriza, la Comisión considera que su inclusión como miembro del CONASEC permitirá que la estrategia de seguridad integre la perspectiva migratoria, a través de información relevante sobre la situación migratoria y sus impactos en la seguridad, lo que finalmente coadyuvará a desarrollar medidas de control y prevención más efectivas.

**f. Análisis sobre las iniciativas legislativas que proponen modificar las funciones del CONASEC (PLs 8227, 10188 y 10284)**

El Proyecto de Ley 10284/2024-CR propone reincorporar como función del CONASEC la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Recordemos que, el literal a) del artículo 9 de la Ley 27933 fue modificada mediante el Decreto Legislativo 1618, en los términos siguientes:

| Ley 27933<br>(antes de la modificación) | Ley 27933<br>(después de la modificación) |
|---|---|
| **Artículo 9.- Funciones del Consejo**<br>El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana tiene las siguientes funciones:<br>a) Proponer ante la Presidencia del Consejo de Ministros, la aprobación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo un enfoque descentralizado, de gestión por resultados e intercultural. | **Artículo 9.- Funciones del Consejo**<br>El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana tiene las siguientes funciones:<br>a) Proponer ante la Presidencia del Consejo de Ministros, la aprobación de políticas, planes, programas, estrategias y proyectos de seguridad ciudadana de relevancia nacional, los cuales deben estar alineados a los instrumentos de gestión del SINAPLAN y tomar en consideración las particularidades culturales y lingüísticas de la población. |

Si bien es cierto la norma suprimió la denominación "plan nacional de seguridad ciudadana", incluyó otros instrumentos cuya aprobación puede ser propuesta por el CONASEC, tales como las políticas, **planes**, programas, estrategias y proyectos de seguridad ciudadana, es decir, no menoscaba la posibilidad de formulación de medidas o acciones para fortalecer la seguridad en nuestro país.

El mismo decreto legislativo también modificó el artículo 5 de la mencionada ley estableciendo que el CONASEC es responsable de cumplir con las políticas en materia de seguridad ciudadana. En ese sentido, actualmente, se encuentra vigente la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana

al 2030, aprobado mediante Decreto Supremo 006-2022-IN, la cual constituye el marco rector para la formulación de estrategias y acciones en materia de seguridad en el país. Este documento aborda el problema de la seguridad ciudadana y establece cinco objetivos prioritarios para prevenir la comisión de delitos, estos son: i) incrementar las acciones de la prevención de delitos y violencias; ii) mejorar los servicios de seguridad ciudadana; iii) reducir la victimización por delitos patrimoniales en espacios públicos; iv) reducir la incidencia de delitos violentos; y v) disminuir los delitos cometidos por bandas criminales.

Por consiguiente, reintroducir la obligación de un "Plan Nacional de Seguridad Ciudadana" con una duración fija podría considerarse una duplicidad normativa innecesaria. En lugar de imponer un plan de tres años, es preferible fortalecer y optimizar la implementación de la actual política multisectorial, que brinda un marco a largo plazo y una mayor capacidad de adaptación y coordinación interinstitucional. Por ende, las propuestas relacionadas con este planteamiento carecen de objeto que sean analizadas.

Por otro lado, las proposiciones normativas 8227/2023-CR y 10188/2024-CR plantean que el Presidente del Consejo de Ministros, en representación del CONASEC, informe al Pleno del Congreso, de manera obligatoria en el mes de abril de cada año, sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, para tal efecto, la primera de las iniciativas legislativas propone incorporar un literal al artículo 9 de la Ley del SINASEC; mientras que, la segunda, sugiere la modificación del artículo 6 de la mencionada norma.

No obstante, cabe advertir que, actualmente, el literal d) del artículo 9 de la Ley 27933 establece que la CONASEC debe informar anualmente a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República sobre las políticas, planes, programas, estrategias y proyectos de seguridad ciudadana. Esto significa que, la evaluación sobre la viabilidad de los proyectos de ley debe realizarse sobre la base de esta disposición.

La seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones del país dado los altos índices delictivos. Resulta consustancial a dicha preocupación que los representantes de la patria, en ejercicio de sus funciones, fiscalicen el cumplimiento de los principales instrumentos aprobados en esta materia. Si bien es cierto, la ley vigente establece que el CONASEC debe informar a la comisión de Defensa Nacional, no es menos cierto que el Pleno del Congreso constituye la máxima instancia del parlamento, por lo que, informar al Pleno permitirá que toda la representación nacional participe del debate, generando mayores propuestas y recomendaciones.

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que, actualmente, no se encuentra vigente el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023, pues este concluyó su periodo de aplicación en diciembre de 2023. En su lugar, en junio de 2022, se aprobó la Política Nacional Multisectorial de Seguridad

Ciudadana al 2030. Esta política aborda la seguridad ciudadana desde un enfoque integral y multisectorial, con el objetivo de reducir los niveles de victimización.

**g. Análisis de la propuesta de reemplazar al órgano que ejerce la Secretaría Técnica del CONASEC (PL 10188)**

El Proyecto de Ley 10188/2024-CR propone la modificación del artículo 11 de la Ley 27933 con la finalidad de trasladar la Secretaría Técnica del CONASEC de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior a un nuevo Órgano Técnico de Seguridad Ciudadana adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Al respecto, advertimos que la proposición normativa se sustenta en que el artículo 6 de la Ley 27933, dispone que el CONASEC depende de la Presidencia de la República y está presidido por el Presidente del Consejo de Ministros; sin embargo, no toma en cuenta que el artículo 3-A de la precitada norma, encarga al Ministerio del Interior la rectoría de todo el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, incluida la del CONASEC como instancia integrante de este. Esto se debe a que, bajo su dependencia se encuentra la Policía Nacional del Perú, institución que por mandato constitucional está encargada de velar por el orden interno y la seguridad ciudadana.

Además, la Secretaría Técnica del CONASEC no solo cumple una función de asistencia técnica, sino que también debe articular y coordinar la ejecución de la política de seguridad ciudadana en los distintos niveles de gobierno. Motivo por el cual, la propuesta no puede ser amparada.

**h. Análisis de las propuestas para incorporar a las comunidades nativas y pueblos originarios en el CORESEC, COPROSEC y CODISEC (PLs 1464 y 1598)**

Las iniciativas legislativas 1464/2021-CR y 1598/2021-CR proponen la modificación de los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 27933, a efectos de incorporar a un representante de las comunidades nativas y pueblos originarios como miembros del Comité Regional, Provincial y Distrital de Seguridad Ciudadana, respectivamente.

Para determinar la viabilidad de las referidas propuestas legislativas, es necesario citar lo establecido en el artículo 2 del Reglamento de la Ley de las Rondas Campesinas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 025-2003-JUS, el cual establece que, son Rondas Campesinas, las organizaciones sociales integradas por pobladores rurales, así como las integradas por miembros de las comunidades campesinas, dentro del ámbito rural; y, son Rondas Comunales, las organizaciones sociales integradas por miembros de las comunidades nativas.

De igual manera, es oportuno hacer mención a las funciones que desempeñan las rondas, según el artículo 12 del precitado Reglamento, entre ellas tenemos, el contribuir a la defensa de la integridad física, moral y cultural de los miembros de la Comunidad Campesina, de la Comunidad Nativa, del Caserío u otro centro poblado, para mantener la paz y seguridad de la población. Asimismo, garantizan el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los miembros de la Comunidad Campesina, de la Comunidad Nativa, del Caserío u otro centro poblado al que pertenecen, de conformidad con la Constitución y las leyes.

Estando al ámbito de las funciones que cumplen las rondas campesinas y, considerando la importante labor que desempeñan dentro de las Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas, Caseríos u otros centros poblados, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana los ha incluido como miembros de los Comités Provinciales y Distritales, que son los niveles jurisdiccionales donde estas tienen presencia y se desenvuelven.

Además, tanto el Comité Provincial como el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, tienen como parte de sus integrantes a tres alcaldes de los distritos con mayor número de electores de la provincia, así como a dos alcaldes de los centros poblados menores, respectivamente, autoridades que también representan a los ciudadanos de las comunidades campesinas y comunales.

Por lo tanto, las propuestas para incluir a las comunidades nativas y pueblos originarios como parte del Comité Regional, Provincial y Distrital de Seguridad Ciudadana son inviables, pues generaría una duplicidad de representación de estas organizaciones ante el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Sin perjuicio de ello, es menester advertir que los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 27933 abren la posibilidad de que el comité regional, provincial y distrital, respectivamente, de acuerdo a la realidad particular de sus respectivas circunscripciones, incorporen a nuevos miembros.

**i. Análisis de la iniciativa que propone la difusión del mapa del delito (PL 1000)**

El Proyecto de Ley 1000/2021-CR propone la difusión del mapa del delito a nivel nacional, mediante la modificación del numeral 4.5 del artículo 4 del Decreto Legislativo 1316, incorporando un párrafo en los siguientes términos: *Las municipalidades provinciales y distritales dentro del ámbito de su jurisdicción procederán a la difusión del mapa del delito por los medios de comunicación masivos, centrándose en las áreas de mayor incidencia delictiva.*

De acuerdo con la Guía metodológica para el diseño de sectores y mapa del delito en la jurisdicción de las Comisarias de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante Resolución Ministerial 007-2019-IN, *el Mapa del Delito es la representación gráfica de un espacio geográfico, determinado manual o*

*digitalmente a través de un aplicativo informático, basado en el análisis estadístico de las denuncias u ocurrencias policiales registradas en el SIDPOL o los cuadernos de registro de denuncias, así como la reiterancia, frecuencia y continuidad de los delitos y faltas, cuyas variables son graficadas en un mapa de calor. (...) La información obtenida está dividida por tipos de delitos, sub tipos y modalidades, los mismos que serán representados por iconos, cada uno tiene una referencia de acuerdo a la leyenda establecida y estandarizada.*

De esa manera, el mapa del delito constituye una herramienta de gestión para visualizar la situación de delitos en determinadas zonas territoriales o geográficas. Permite detectar y analizar las tendencias de concentración y evolución de los hechos delictivos.

Los mapas pueden ser utilizados por la Policía Nacional para responder y apoyar a la demanda de servicios, identificar lugares con mayor índice de comisión de ellos, adoptar medidas que lo reduzcan, así como detener a delincuentes; pero también, se constituyen en un instrumento útil para la prevención de la delincuencia y reducción de la inseguridad ciudadana.

Efectivamente, el mapa del delito permite planificar estratégicamente los tipos de patrullaje, los recorridos, la distribución de los efectivos, vehículos y demás recursos con que cuente, sobre la base del conocimiento de los sectores con mayor incidencia de inseguridad.

La prevención del delito se ha convertido en una estrategia central de los gobiernos para revertir los índices delictivos y la percepción de inseguridad. En particular, la prevención situacional del delito se ha convertido en un modelo de intervención física de los espacios públicos para tornarlos más seguros.

Como se ha visto en líneas anteriores, la percepción de la inseguridad ciudadana en el Perú es alta, la tranquilidad de las familias se ha visto afectada por esta situación. Si bien el Estado peruano ha venido implementando distintas medidas en la lucha efectiva contra este problema público, aún sigue siendo un reto que merece atención prioritaria para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

De allí que la difusión del mapa del delito permitiría que la ciudadanía conozca las zonas más vulnerables, promoviendo una mayor cultura de prevención y vigilancia; además, podrían coordinar estrategias más efectivas para prevenir delitos en zonas críticas y exigir mayor presencia policial o del serenazgo.

Actualmente, existe una herramienta digital diseñada por el INEI que contiene información sobre el mapa de calor de los lugares con mayor índice delictivo, esta es DataCrim - Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y seguridad ciudadana. Por consiguiente, la comisión considera viable la propuesta normativa.

## 5.4 Análisis sobre la necesidad, viabilidad y oportunidad de la propuesta legislativa

La iniciativa legislativa propuesta resulta necesaria toda vez que la inseguridad ciudadana en el país constituye, hoy en día, uno de los principales problemas que afecta a toda la población en general, sin distinción de género, edad o condición social. El dinamismo con el que se mueve la delincuencia exige a las autoridades la adopción de políticas públicas que se encuentren acordes con la realidad y que tengan un impacto directo en la diminución de los índices de criminalidad. Para ello, resulta imprescindible que el CONASEC se reúna por lo menos seis veces al año para la formulación de nuevas políticas públicas, pero también para la evaluación de las ya implementadas. Asimismo, es necesario que este organismo informe al Congreso sobre el cumplimiento de los instrumentos que haya adoptado en ejercicio de sus funciones, pues el Parlamento nacional representa a la población. La inclusión del Superintendente Nacional de Migraciones en la composición del CONASEC también resulta imprescindible dado que existen muchas denuncias que atribuyen a ciudadanos extranjeros un importante número de hechos delictivos.

La propuesta normativa también resulta viable, puesto que la actualidad demuestra que las medidas adoptadas no vienen dando los resultados esperados, lo cual exige que las autoridades redoblen esfuerzos y se reúnan una mayor cantidad de veces al año para analizar la coyuntura nacional en materia de seguridad ciudadana; además, considerando que el Congreso de la República ejerce función fiscalizadora y de control político, es factible que el CONASEC le cuentas.

La norma que se propone a su vez es oportuna, debido la creciente inseguridad ciudadana, que hace un llamado a adoptar medidas constantes que coadyuven a la lucha frontal contra la delincuencia.

## 5.5 Análisis costo/beneficio

El texto sustitutorio propuesto no vulnera la prohibición establecida en el artículo 79 de la Carta Magna, pues no crea ni aumenta el gasto público; sin embargo, puede representar una carga adicional para los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana al tener que sesionar un mayor número de veces al año e informar al Pleno del Congreso sobre el cumplimiento políticas en materia de seguridad ciudadana; asimismo, implicaría una mayor carga los gobiernos locales al tener que difundir sus respectivos mapas del delito.

Los beneficios de la aprobación de estas propuestas normativas son significativos, ya que contribuirá con la seguridad ciudadana, permitiendo que los integrantes del CONASEC propongan, formulen y evalúen políticas públicas en esta materia, lo cual finalmente redundará en beneficio de la población.

## VI. CONCLUSIÓN

En atención a las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del periodo anual de sesiones 2024-2025, en su sesión .....ordinaria, celebrada el ..... de 2025, ha acordado por **UNANIMIDAD/MAYORÍA** de los presentes, la aprobación del Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 29/2021-CR, 54/2021-CR, 1000/2021-CR, 1059/2021-CR, 1464/2021-CR, 1598/2021-CR, 2041/2021-CR, 2488/2021-CR, 3349/2022-CR, 3552/2022-CR, 4751/2022-CR, 6420/2023-CR, 8227/2023-CR, 8418/2023-CR, 10188/2024-CR y 10284/2024-CR, con el siguiente texto sustitutorio:

### LEY QUE MODIFICA LA LEY 27933, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA VARIAR LA COMPOSICIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

**Artículo único. Modificación de los artículos 5, 7 y 9 de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana**

Se modifica el segundo párrafo del artículo 5, el artículo 7 y el literal d) del artículo 9 de la Ley 29733, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en los siguientes términos:

**"Artículo 5. Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana**

[...]

El Consejo Nacional se reúne ordinariamente seis veces al año, por lo menos dos de ellas en sesiones descentralizadas; y extraordinariamente cuando lo convoque su presidente. El quórum para las sesiones del Consejo es de la mitad más uno de sus miembros titulares. Las sesiones son convocadas para la toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana y de aquellos otros fenómenos delictivos que se le vinculen, los cuales son monitoreados por la secretaría técnica para garantizar su cumplimiento.

[...]

**Artículo 7. Miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana**

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana está integrado por:

- El/la Presidente/a del Consejo de Ministros.
- El/la Ministro/a de Economía y Finanzas.
- El/la Ministro/a del Interior.
- El/la Ministro/a de Justicia y Derechos Humanos.
- El/la Ministro/a de Educación.
- El/la Ministro/a de Salud.
- El/la Ministro/a de Trabajo y Promoción del Empleo.
- El/la Ministro/a de Comercio Exterior y Turismo.
- El/la Ministro/a de Transportes y Comunicaciones.
- El/la Ministro/a de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- El/la Ministro/a de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

- El/la Ministro/a de Cultura.
- El/la Ministro/a de Desarrollo e Inclusión Social.
- El/la Presidente/a del Poder Judicial.
- El/la Fiscal de la Nación.
- El/la Defensor/a del Pueblo.
- El/la Presidente/a Ejecutivo/a de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA).
- **El/la Superintendente de la Superintendencia Nacional de Migraciones.**
- El/la Presidente/a del Sistema Penitenciario Nacional.
- El/la Comandante General de la Policía Nacional del Perú.
- El/la Comandante General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
- El/la Alcalde/sa Metropolitano de Lima.
- El/la Presidente/a de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).
- El/la Presidente/a de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).
- El/la Presidente/a de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE)

El/la presidente/a del CONASEC puede invitar a otras autoridades del Estado y/o representantes del sector privado y/o representantes de la sociedad civil organizada, las universidades, centros de investigación, comités de autodefensa, entre otros, que considere conveniente.

**Artículo 9. Funciones del Consejo**
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana tiene las siguientes funciones:

[...]
d) **Exponer en la cuarta semana del mes de abril de cada año de manera obligatoria ante el Pleno del Congreso de la República, el informe sobre el cumplimiento de las políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y compromisos en materia de seguridad ciudadana, para promover la articulación interinstitucional de manera transversal.**
[...]"

## DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

**ÚNICA. Adecuación del Reglamento**
El Poder Ejecutivo adecua el Reglamento de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobado por el Decreto Supremo 011-2014-IN, a las modificaciones dispuestas en la presente ley, en un plazo no mayor de sesenta días calendario contados a partir de su entrada en vigor.

## DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

**ÚNICA. Modificación del artículo 4 del Decreto Legislativo 1316, Decreto Legislativo que modifica la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y regula la cooperación de la PNP con las municipalidades para fortalecer el Sistema de Seguridad Ciudadana**

Se modifica el numeral 4.5 del segundo párrafo del artículo 4 del Decreto Legislativo 1316, Decreto Legislativo que modifica la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y regula la cooperación de la PNP con las municipalidades para fortalecer el Sistema de Seguridad Ciudadana, en los siguientes términos:

"**Artículo 4.- Cooperación con las municipalidades**

[...]

La Policía Nacional del Perú tiene a su cargo realizar lo siguiente:

[...]

4.5. Integrar la información con las municipalidades sobre los lugares de su jurisdicción donde se concentran focos de comisión de delitos, actualizando el mapa del delito, y proponiendo las acciones que correspondan en materia de prevención social. Reportar a las respectivas municipalidades cualquier otra información vinculada a actividades delictivas para la mejor planificación de las acciones municipales en el marco de sus atribuciones.
**Las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales, dentro del ámbito de su jurisdicción, difunden el mapa del delito por medios de comunicación masivos, centrándose en las áreas de mayor incidencia delictiva.**
**[...]".**

Dese cuenta.
Sala de sesiones virtuales.
Lima, 10 de marzo de 2025

Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 29/2021-CR, 54/2021-CR, 1000/2021-CR, 1059/2021-CR, 1464/2021-CR, 1598/2021-CR, 2041/2021-CR, 2488/2021-CR, 3349/2022-CR, 3552/2022-CR, 4751/2022-CR, 6420/2023-CR, 8227/2023-CR, 8418/2023-CR, 10188/2024-CR y 10284/2024-CR que, con texto sustitutorio propone la Ley que modifica la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, para variar la composición y responsabilidades del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: MARTINEZ TALAVERA Pedro Edwin FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/03/2025 12:34:30-0500

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: TUDELA GUTIERREZ Adriana Josefina FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/03/2025 17:31:31-0500

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: BAZAN CALDERON Diego Alonso Fernando FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/03/2025 11:52:59-0500



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: AZURIN LOAYZA Alfredo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/03/2025 11:15:01-0500

CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Lima, 7 de ABRIL de 2025
Al orden del día

JAIME ABENSUR PINASCO
Director General Parlamentario
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 29/2021-CR, 54/2021-CR, 1000/2021-CR, 1059/2021-CR, 1464/2021-CR, 1598/2021-CR, 2041/2021-CR, 2488/2021-CR, 3349/2022-CR, 3552/2022-CR, 4751/2022-CR, 6420/2023-CR, 8227/2023-CR, 8418/2023-CR, 10188/2024-CR y 10284/2024-CR que, con texto sustitutorio propone la Ley que modifica la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, para variar la composición y responsabilidades del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: RAMIREZ GARCIA Tania Estefany FAU 20161749126 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/03/2025 15:34:02-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ROSPIGLIOSI CAPURRO Fernando Miguel FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/03/2025 15:21:47-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: SANCHEZ PALOMINO Roberto Helbert FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/03/2025 17:20:05-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: VALER PINTO Hector FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/03/2025 17:55:39-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: VENTURA ANGEL Hector Jose FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/03/2025 16:42:14-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CHIRINOS VENEGAS Patricia Rosa FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/03/2025 11:35:09-0500

## MP Dictamenes

**De:** Notificacion Sistemas
**Enviado el:** jueves, 13 de marzo de 2025 10:09
**Para:** Rosario Carolina Soriano Diaz; mp.interno
**Asunto:** Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
**Datos adjuntos:** d568b8cb61b8ad3f2ccd8859194f2ae2.pdf

**[Solicitante]:** Rsoriano@congreso.gob.pe
**[Asunto]:** Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
**[Mensaje]:** Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 29/2021-CR, 54/2021-CR, 1000/2021-CR, 1059/2021-CR, 1464/2021-CR, 1598/2021-CR, 2041/2021-CR, 2488/2021-CR, 3349/2022-CR, 3552/2022-CR, 4751/2022-CR, 6420/2023-CR, 8227/2023-CR, 8418/2023-CR, 10188/2024-CR y 10284/2024-CR que, con texto sustitutorio propone la Ley que modifica la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, para variar la composición y responsabilidades del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. NOTA: AL FINAL DE LA SESIÓN SE APROBO LA DISPENSA DEL TRÁMITE DE APROBACIÓN DE ACTA PARA EJECUTAR LO ACORDADO.
**[Fecha]:** 2025-03-13 10:09:02
**[IP]:** 192.168.10.219

Su mensaje ha sido recibido.
Por favor, **NO responda a este mensaje**, es un envío automático de una cuenta no supervisada.